

Determinantes de las Dinámicas de Desarrollo Territorial Rural en América Latina

Julio A. Berdegué, Pablo Ospina, Arilson Favareto, Francisco Aguirre, Manuel Chiriboga, Javier Escobal, Ignacia Fernández, Ileana Gómez, Félix Modrego, Eduardo Ramírez, Helle Munk Ravnborg, Alexander Schejtman y Carolina Trivelli

Documento de Trabajo N° 101
Programa Dinámicas Territoriales Rurales
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural



Este documento es el resultado del Programa Dinámicas Territoriales Rurales, que Rimisp lleva a cabo en varios países de América Latina en colaboración con numerosos socios. El programa cuenta con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). Se autoriza la reproducción parcial o total y la difusión del documento sin fines de lucro y sujeta a que se cite la fuente.

This document is the result of the Rural Territorial Dynamics Program, implemented by Rimisp in several Latin American countries in collaboration with numerous partners. The program has been supported by the International Development Research Center (IDRC, Canada). We authorize the non-for-profit partial or full reproduction and dissemination of this document, subject to the source being properly acknowledged.

Este documento se basa en una serie de textos elaborados por un grupo de trabajo integrado por los socios del programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) que son coautores del presente texto. Se agradece a los asistentes de investigación Ricardo Fuentealba, Mariela Ramírez y Rodrigo Yáñez por el procesamiento de información de los informes de los proyectos del programa. Agradecemos también los aportes de: Anthony Bebbington, Merle Faminow, Luis Marambio, Annalisa Mauro, José Antonio Mendoza, Susan Paulson, Edelmira Pérez, Francisco J. Pichón, Felicity Proctor, Julian Quan, María Angélica Ropert, Vera Schattan, Claudia Serrano, Octavio Sotomayor, Pim Verhallen y Stephen Vosti. Igualmente, agradecemos los aportes de los participantes en el Taller de Coordinadores de Proyectos del Programa DTR, octubre 2010, Santiago. Finalmente, agradecemos el invaluable, inteligente y riguroso trabajo de edición del borrador final de este artículo, a cargo de María Cuvi.

Cita / Citation:

Berdegue, J., Ospina, P., Favareto, A., Aguirre, F., Chiriboga, M., Escobal, J., Fernández, I., Gomez, I., Modrego, F., Ramírez, E., Ravnborg, H.M., Schejtman, A., Trivelli, C. 2011. "Determinantes de las Dinámicas de Desarrollo Territorial Rural en América Latina". Documento de Trabajo N°101. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

© Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Programa Dinámicas Territoriales Rurales
Casilla 228-22
Santiago, Chile
Tel + (56-2) 236 45 57
dtr@rimisp.org
www.rimisp.org/dtr

Índice

1.- Introducción.....	1
2.- Revisión de literatura	3
3.- Método	7
4.- Resultados	15
Cambios en ingreso per cápita, incidencia de pobreza y distribución del ingreso.....	15
Determinantes de las dinámicas territoriales	20
La dimensión ambiental de las dinámicas.....	37
5.- Implicaciones	39
Bibliografía.....	41

1.- Introducción

La aspiración de que las regiones rurales latinoamericanas logren en forma simultánea crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental, ha motivado por muchos años las estrategias y políticas públicas y la acción de muchos agentes públicos y privados.

A pesar del progreso, las desigualdades económicas y sociales son características fuertemente enraizadas en América Latina (de Ferranti et al., 2004; CEPAL, 2010; PNUD, 2010; Lustig et al., 2011). Ellas se relacionan, como causa y como efecto, con las enormes diferencias de poder entre diferentes sectores de nuestras sociedades. En la mayoría de los países de la región, el 10 por ciento más rico de la población concentra más de la mitad del ingreso, y el 20 por ciento más pobre recibe menos de un 5 por ciento del ingreso total. Los índices de Gini del ingreso per cápita van desde el 0.42 de Perú o el 0.43 de Uruguay, al 0.57 de Brasil o el 0.59 de República Dominicana; aún nuestros países con mejor distribución del ingreso son campeones en las grandes ligas mundiales de la desigualdad.

La hipótesis subyacente que justifica el programa Dinámicas Territoriales Rurales, es que las desigualdades socioeconómicas en América Latina tienen un componente territorial diferente y adicional a las desigualdades que se manifiestan entre personas, hogares y grupos sociales. En Chile, en 2002 había municipios con ingreso per cápita de 975 mil pesos y otros con ingreso per cápita de 66 mil pesos (Modrego et al. 2008). En Perú el 2007, la provincia de Jorge Basadre tenía un gasto per cápita promedio de 710 soles, que es 5.2 veces el de la provincia de Churcampá (Escobal y Ponce, 2008). En México en 2005, los habitantes de San Pedro Garza García tienen un ingreso per cápita 24 veces mayor que los de Acatepec (Yúnez-Naúde et al., 2009). En contraste, en Canadá la diferencia de ingreso per cápita entre los municipios más y menos ricos, es de aproximadamente 1.5 veces (Olfert et al. 2011). También tenemos brechas territoriales en tasas de pobreza, con rangos de 52% hasta casi cero en los municipios de Chile, de 92% a 8% en las Provincias del Perú, y de 99% a 0% en los municipios de México. Las diferencias territoriales en la concentración del ingreso son también notables; los Ginis de ingreso per cápita entre municipios de Chile varían entre 0.76 y 0.36, entre provincias del Perú entre 0.41 y 0.25, y entre municipios de México entre 0.7 a 0.2.

Como ha señalado recientemente la CEPAL (2010, p. 131): "Estas brechas relativas a la productividad y la sociedad tienen sus mapas, es decir, se plasman en la segmentación territorial y, a la vez, se nutren de ella. Esa segmentación implica que tanto en cada uno de los países como en la región en su conjunto el lugar de residencia de una persona determina en buena medida su condición socioeconómica".



También hay diferencias territoriales en la sustentabilidad ambiental de los procesos de crecimiento y desarrollo. Ello no tiene que ver solamente con la fragilidad y resiliencia de los diferentes ecosistemas; también importan las diferencias en los incentivos y la capacidad de las sociedades para conservar el medio ambiente en diferentes territorios de un país.

Dada esta desigualdad espacial, no debería sorprendernos que las políticas generales - económicas, sectoriales, ambientales, sociales- tengan efectos territorialmente diferenciados. Y, además, si existe desigualdad espacial, algunos territorios tendrán mayor capacidad para aprovechar las oportunidades de desarrollo, sean estas de mercado o de política pública.

Es por ello que en la región han cobrado fuerza los llamados a prestar más atención a los enfoques territoriales de desarrollo rural (Abramovay, 1999; da Veiga 2000; Echeverría 2003; Echeverri y Ribero, 2002; Schejtman y Berdegué, 2003; de Janvry y Sadoulet, 2004; de Ferranti et al., 2005; Banco Mundial, 2007). Muchas de las iniciativas de desarrollo rural con enfoque territorial en la región han sido diseñadas desde una perspectiva normativa (BID, 2005; México, 2011; MCPEC, 2010 IICA y MDA, 2006; CEPAL, 2010; Echeverri y Sotomayor, 2010). En esos casos, la discusión intelectual y política se centra en las estrategias, objetivos, métodos e instrumentos para diseñar y gestionar políticas y programas de desarrollo territorial. Por lo general, estas propuestas parten de constatar las brechas territoriales, derivando de ello un objetivo político de lograr mejores equilibrios territoriales. Las propuestas enfatizan combinaciones diversas de políticas e instrumentos de dos tipos: aquellos orientados a movilizar las capacidades endógenas de los territorios, y otros que transfieren recursos y hacen inversión pública en favor de los territorios rezagados.

Las organizaciones que participamos en el programa Dinámicas Territoriales Rurales, abordamos el tema con un interés normativo pero desde una perspectiva analítica y empírica. Nuestro punto de referencia son los territorios que han logrado tener crecimiento económico con inclusión social y con sustentabilidad ambiental. Para proponer qué hacer, tratamos de entender qué está pasando y, sobretodo, por qué ciertos territorios tienen dinámicas de desarrollo más exitosas en lo económico, lo social y lo ambiental.



2.- Revisión de literatura

El programa se plantea tres preguntas:

- a) ¿Existen en América Latina territorios rurales que estén creciendo económicamente con inclusión social y con sustentabilidad ambiental?
- b) ¿Qué factores determinan las dinámicas territoriales exitosas, es decir, aquellas que han resultado en crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental?
- c) ¿Qué se puede hacer desde la política pública pero también desde otros espacios de acción pública, para estimular y promover este tipo de dinámicas territoriales?

Sabemos bastante sobre la relación entre crecimiento económico y reducción de pobreza y en los últimos 15 años varios países de América Latina han logrado establecer un conjunto fuerte de políticas y de instituciones que logran -al menos parcialmente- estos objetivos bajo diferentes contextos. Sabemos que sin crecimiento económico no es posible reducir significativa y establemente la pobreza, y que el crecimiento económico sin políticas públicas adecuadas y activas pierde eficacia como instrumento reductor de pobreza.

Sabemos menos y no hay consenso político sobre la relación entre crecimiento económico, pobreza y distribución del ingreso. Hay quienes continúan afirmando lo propuesto por Kuznets en el sentido de que para distribuir primero hay que crecer, aunque esta teoría ha sido cuestionada en los últimos 20 años por numerosos autores (entre otros Sen, 1992, 2000; Alesina and Rodrik 1994; Deininger y Squire 1996; Bourguignon et al. 1998, 2002). Hay evidencia de que en países en desarrollo los niveles extremos de desigualdad reducen las tasas de crecimiento (Deininger y Olinto 2000); que la concentración del poder político asociado a la inequidad social resulta en políticas de desarrollo sub-óptimas desde el punto de vista de la eficiencia económica (Acemoglu et al. 2001); que la desigualdad reduce el impacto del crecimiento sobre la pobreza (Bourguignon 2004.); que la desigualdad de oportunidades (es decir, el acceso desigual a los activos) es aún más perjudicial que la desigualdad en la distribución del ingreso (Birdsall y Londoño 1997); que la interacción entre fallas de mercado y acceso desigual a los activos es particularmente dañina para las oportunidades de crecimiento (Bardhan 1984; Carter y Zimmerman 2000); que en sociedades desiguales las élites tienen una influencia desmedida en los procesos políticos y en las instituciones de tal forma que estas tienden a reproducir la desigualdad (de Ferranti et al. 2004; Banco Mundial 2006) y, en fin; que la auto-retroalimentación de las instituciones y políticas causantes de la inequidad puede llegar al extremo de colocar a la sociedad en verdaderas trampas de desigualdad (Bourguignon et al. 2007; Tilly 2008). También sabemos que hay soluciones a la desigualdad, a través



de cambios estructurales provocados por el crecimiento económico, de presiones institucionales externas o de movilizaciones sociales y acciones colectivas, apoyadas a veces en esfuerzos reformistas de agentes del Estado (Bebbington et al., 2008).

Si agregamos a la ecuación la dimensión ambiental, la dificultad del problema aumenta considerablemente. Algunos autores han propuesto la existencia de una Curva de Kuznets Ambiental (Grossman y Krueger, 1994; Brock y Taylor, 2004), es decir, que se pierde sustentabilidad cuando el país tiene bajos niveles de ingreso, pero que una vez que se llega a algún umbral de PIB per cápita, se comienza a ganar sustentabilidad. Vosti y Reardon (1997) argumentan que en el largo plazo los objetivos de crecimiento, reducción de pobreza y sustentabilidad son compatibles, pero que "dichas complementariedades pueden tardar generaciones en manifestarse, y para entonces muchos recursos naturales se habrán perdido y muchos millones se habrán alimentado mal" (p. 2; trad. libre); es decir, de existir tal Curva de Kuznetz, ella operaría en plazos que la hacen social y políticamente inaceptable como mecanismo de solución del conflicto entre objetivos. Arrow et al. (1995) nos recuerdan que muchas veces son los pobres o los países en desarrollo quienes deben soportar los costos de las reformas institucionales que hacen posible reducir el conflicto entre crecimiento y medio ambiente.

Una teoría que ha tenido más respaldo mediático que evidencia empírica, es aquella que indica que hay un "círculo vicioso" entre pobreza y deterioro ambiental. Reardon y Vosti (1997) analizan con detención este modelo y señalan que hay al menos cinco grupos de argumentos que permiten cuestionar o, al menos, relativizar su validez; varios de los argumentos adelantados por los autores nos remiten a las condiciones sitio-específicas de la pobreza, del medio ambiente, y de los factores (incluyendo las instituciones) que median entre ambos. En esa misma línea, Escobar y Swintton (2003) y Ravnborg (2003) concluyen que no hay evidencia que permita sostener una relación causal entre mayor pobreza y mayor deterioro ambiental en diferentes países y regiones rurales de América Latina.

Hay literatura abundante que argumenta que la desigualdad contribuye al deterioro ambiental. Autores como Byce (2003) postulan que cuando los que se benefician del deterioro ambiental tienen mayor poder que aquellos que sufren las consecuencias, el resultado será una menor protección del medio ambiente. Magnani (2000) analiza datos a nivel de país y concluye que existe una relación inversa entre desigualdad e inversión pública en protección ambiental. Kempf y Rossignol (2005) analizan esta relación en el contexto de economías en crecimiento y utilizando una perspectiva de economía política; su conclusión es que a mayor desigualdad en la distribución del ingreso, menor será la disposición de los votantes pobres para apoyar políticas de conservación ambiental, pues tenderán a preferir políticas pro-crecimiento económico.

Si nos aproximamos al problema empíricamente, cualquier análisis mínimamente detallado de los cambios en actividad económica, inclusión social y sustentabilidad ambiental a escala de territorios rurales, arrojará por resultado un fragmentado mosaico de tipos de



dinámicas. Comprender los patrones y regularidades que están ocultas en esta heterogeneidad no es cosa fácil, cuando carecemos de una teoría que nos ayude a interpretar esta desafiante realidad.

Contamos con la Nueva Geografía Económica que explica el proceso de aglomeración de la actividad económica como fuente de heterogeneidad espacial del desarrollo, a partir de un proceso de causalidades circulares donde las variables clave son los costos de transporte, las economías de escala y el acceso a los mercados (Krugman 1995; Redding y Venables 2004). Una reciente aplicación de este cuerpo teórico a los problemas del desarrollo es el informe *Reshaping Economic Geography* (Banco Mundial 2009), que ha sido fuertemente criticado por postular que el mejor equilibrio de largo plazo se logra si se quitan del camino todos los obstáculos a la integración de los mercados y a la densificación o aglomeración de las actividades económicas. Más allá de lo que podamos discutir sobre esta proposición, lo cierto es que no es una teoría del cambio rural a escala territorial.

Puede ser que la dotación de recursos naturales o la localización de un territorio le confiera ventajas en cuanto a su potencial de crecimiento económico (Sachs, 2001; Blum, 2003). De hecho, algunos de los estudios del programa confirman que hay grandes diferencias en capital humano, infraestructura y características geográficas entre territorios que reducen pobreza y aquellos que no lo hacen (Escobal y Ponce, 2011). Pero la evidencia empírica y estudios recientes demuestran que el concepto de ventajas comparativas derivadas de una mayor dotación de recursos naturales, de dotación de infraestructura, o de proximidad a los mercados, no es suficiente para explicar el crecimiento económico con inclusión social y con sustentabilidad ambiental (North, 2005; Rodrik, 2003). Entendemos que los efectos distributivos del crecimiento y sus relaciones con los ecosistemas y los recursos naturales, tienen que ver con los marcos institucionales en que se realizan los procesos de desarrollo. Y, además, que las instituciones que están vigentes en una sociedad determinada, no son fruto del azar ni de algún tipo de mano invisible, sino que son construcciones sociales y que en su gestación tienen un papel importante las relaciones entre actores y grupos sociales, como concuerdan teóricos de distintas disciplinas y tradiciones (North, 2005; Acemoglu y Robinson, 2006; Rodrik, 2011; Fligstein, 2001; Mahoney y Thelen, 2010).

Los especialistas en desarrollo territorial también han generado algunas propuestas sobre los factores que son necesarios para estimular procesos de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental. La OECD (2005) apunta a factores que determinan el nivel de producción (capital físico, capital humano, cambio técnico), la eficiencia de las empresas y de los procesos de recursos (leyes, políticas, regulaciones) y los niveles de cohesión social y de emprendimiento. La Comisión Europea a través de su programa LEADER+ propuso una serie de principios (Observatorio Europeo Leader, 1999) agrupados en el concepto de competitividad territorial, la que se descompone en cuatro dimen-



siones, denominadas competitividad social, competitividad económica, competitividad ambiental y localización en el contexto global. Echeverri y Sotomayor (2010) reseñan la experiencia Iberoamericana de desarrollo territorial, pero el foco de su análisis es la gestión territorial, es decir, la política pública, más que el análisis de los procesos de cambio en los territorios y sus determinantes.

En síntesis, carecemos de un modelo que nos permita responder convincentemente la pregunta principal del programa, es decir, por qué algunos territorios rurales en América Latina tienen crecimiento económico con inclusión social y con sustentabilidad ambiental. La propuesta que hacemos en el presente documento es un avance hacia una teoría operacional (Merton, 1949), es decir, hacia un conjunto de conceptos derivados de análisis empíricos que nos ayuden a interpretar y explicar dinámicas de territorios específicos y, con esa base, dialogar con las estrategias y políticas públicas. Esta teoría o modelo operacional al que aspiramos tiene sustento en teorías y conceptos de la economía, la sociología, la ciencia política, la geografía y otras ciencias sociales, pero no busca ni tiene ninguna pretensión de ser una teoría general con capacidad predictiva.



3.- Método

El programa se inició con la hipótesis de que las relaciones entre actores sociales, instituciones y activos en los territorios, determinan las dinámicas de desarrollo territorial y sus efectos en términos de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental (Rimisp, 2008). Los territorios con dinámicas de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental, serían aquellos donde los actores sociales han construido instituciones que favorecen determinadas distribuciones y usos de los activos tangibles e intangibles.



Tabla 1. Territorios estudiados por el programa Dinámicas Territoriales Rurales.

Territorio	País	Descripción física			Dinámica				Características	Bibliografía disponible
		Tamaño (km ²)	Población total	% de ruralidad (oficial)	Aumento ingreso o gasto per cápita?	Reducción pobreza?	Mejor distribución de ingreso o gasto?	Ambientalmente sustentable?		
Villamontes	Bolivia	10.922	23.765	32%	Sí	Sí	-	Sí	Extracción de metales, gas y petróleo, junto con políticas subnacionales y articulación de actores locales	Hinojosa y Hennermann (2011); Hinojosa et al. (2012).
Cariri Paraaibano	Brasil	7.075	167.428	28%	Sí	Sí	Sí	-	Políticas gubernamentales dieron lugar a una transferencia masiva de ingresos hacia el interior del país	Favareto et al. (2012)
Litoral Centro-Sur y Litoral Centro-Norte de Santa Catarina	Brasil	1.272	510.581	9%	Sí	Sí	Sí/No	Sí	Urbanización junto con desarrollo de centros turísticos e industriales, un proceso de ecologización del territorio; pesca y agricultura familiar	Cerdan et al. (2012)
Valle de Jiquirica	Brasil	12.462	317.054	46%	Sí	Sí	Sí	-	Diversificación agropecuaria de pequeños y medianos agricultores de escala familiar, junto con políticas públicas fuertes de transferencia de ingresos	Quan et al. (2012)



Chiloé Central	Chile	3.412	79.000	48%	Sí	Sí	No	No	Transformación productiva del territorio, desde un sector rural tradicional hasta el desarrollo de la salmonicultura (con un importante segmento de la población trabajando en el sector industrial y los servicios)	Ramírez et al. (2012); Ramírez et al. (2009a); Ramírez et al. (2009b); Macé y Bornschelgl (2010)
Secano de O'higgins	Chile	2.153	20.000	80%	Sí	Sí	Sí	No	Intensificación agrícola; estímulos a la inversión privada en el sector primario, liberalización del uso de los recursos naturales, subsidio a la inversión productiva y el desarrollo de la infraestructura social.	Modrego et al. (2012); Acuña y Mendoza (2010)
Municipios Susa y Simijaca	Colombia	217	20.799	50%	Sí	Sí	Sí	-	Desarrollo de la ganadería y la agroindustria lechera en territorio con fuerte dualismo agrario	Arias et al. (2012)
Provincia de Loja, sub – región de Cariamanga (cafetalera)	Ecuador	2.705	71.017	78%	Sí	Sí	Sí	-	Dinámicas de base agrícola: el café orgánico y maíz intensivo para industria avícola	Ospina et al. (2012b); Hollenstein et al. (2010)
Provincia de Loja, sub-región de Pindal/Alamor (maicera)	Ecuador	724	20.709	68%	Sí	Sí	No	No		



Provincia de Tungurahua	Ecuador	3.369	426.400	59%	Sí	Sí	Sí/No	-	Economía muy diversificada, muchos eslabonamientos locales, fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas vinculadas con mercados nacionales	Ospina et al. (2012a); Ospina et al. (2011); Ospina et al. (2009)
Ribera Norte del Humedal Cerrón Grande	El Salvador	515	66.782	57%	Sí	Sí	No	-	Aprovechamiento de las remesas e inversión en educación y salud; grandes obras de infraestructura	Gómez y Cartagena (2012); Díaz et al. (2010) ; Florian (2010)
Cuenca Ostúa-Güija (Suroriente del país, departamentos de Jutiapa y Jalapa)	Guatemala	924	102.693	61%	Sí	Sí	Sí	-	Diversificación económica (agrícola, empleo no-agrícola e ingresos por remesas), junto con articulación a mercados internos y externos	Romero et al. (2010) ; Florian y Emanuelsson (2010)
Olancho	Honduras	1.009	28.329	60%	Sí	Sí	Sí	-	Explotación de bosques y aserrío de madera, ganadería y agricultura de granos básicos	Quiel y Pineda (2010)
Tlacolula - Ocotlán, Valles Centrales de Oaxaca	México	3.930	124.298	62%	Sí	Sí	No	-	Territorio con fuerte identidad cultural; población indígena; agricultura de autoconsumo, mezcal, turismo, producción artesanal, etc.	Pool-Illsley y Illsley (2010)
CHAH (Sur Centro del estado de Yucatán)	México	689	32.559	21%	Sí	Sí	Sí	-	Transformación productiva del territorio, desde el monocultivo del henequén a un gran número de actividades económicas (nuevos cultivos, turismo, manufactura de ropa con maquilas, etc.)	Yúnez Naude et al. (2012); Vaisman y Paredes (2010)



Macizo de Peñas Blancas	Nicaragua	422	26.737	100%	No	No	Sí	Sí	Actividades cafetaleras, en tránsito a un mayor nivel de diversificación productiva y mayores niveles de certificación en el café; reserva ecológica	Gómez et al. (2011)
Zona Lechera de Santo Tomás	Nicaragua	1.690	37.206	50%	No	No	No	No	Intensificación de producción lechera; papel central de la cooperación internacional; reconstitución de la gran propiedad agraria	Gómez et al. (2012)
Cuatro Lagunas	Perú	619	21.526	50%	Sí	No	No	No	Comunidades campesinas andinas; agricultura, ganadería, pesca, comercio y pequeña minería.	Escobal et al. (2012a)
Jauja	Perú	2.130	88.926	30%	Sí/No	No	Sí	No	Territorio abastecedor tradicional de alimentos para Lima; pierde posición y se encuentra en recomposición de sus actividades productivas	Escobal et al. (2012b)
Valle Sur-Ocongate	Perú	2.167	70.900	63%	Sí	Sí	No	-	Economía agrícola de pequeños productores; proximidad a Cusco estimula diversificación económica (servicios)	Hernández y Trivelli (2012)



Una lectura superficial de la hipótesis podría llevarnos a pensar que las dinámicas territoriales y sus efectos están determinadas exclusivamente por lo que sucede al interior del territorio. Postulamos, sin embargo, que las grandes tendencias económicas, políticas, culturales, ambientales, intensificadas por la globalización, reducen la autonomía de lo local/territorial. Las sociedades en los territorios tienen un abanico acotado de opciones y lo rural cada vez está menos determinado por reglas propias y diferentes a las que estructuran el desarrollo general. En muchos de los casos analizados, las dinámicas territoriales están fuertemente influenciadas -y a veces determinadas- por shocks externos, los que pueden ser de naturaleza económica, político-institucional y/o ambiental.

Sin embargo, hay dos razones que nos llevan a postular que las sociedades locales mantienen un espacio de influencia en sus cursos de desarrollo y que los territorios no son meras veletas que giran automáticamente en la dirección en que sopla el viento. En primer lugar, muchos de los shocks exógenos descritos en los casos, afectan a muchos territorios o incluso a todos los territorios de un país en forma simultánea, pero sus impactos en los territorios, así como las respuestas de los mismos, son diferenciadas: frente a una misma acción, hay muy diversas reacciones. En segundo lugar, constatamos la existencia de casos exitosos de desarrollo territorial donde no esperábamos éxitos, y de dinámicas no exitosas donde esperábamos mejores resultados económicos, sociales y ambientales; las dinámicas de los territorios no son la expresión simple de tener más recursos naturales, o mejor infraestructura o servicios, o una localización privilegiada.

La respuesta a la pregunta de por qué un territorio tiene una dinámica más o menos exitosa, por tanto, no depende solamente de lo que pasa en (dentro de) los territorios sino también de cómo los territorios interactúan con su entorno. Lo que las sociedades locales pueden construir socialmente es su capacidad y poder de interacción con el desarrollo general, o, si se quiere, con la globalización. Al inicio del programa hipotetizamos que esa capacidad y ese poder dependerá de las instituciones, de los actores sociales y de los activos que se construyan o se movilizan territorialmente (Rimisp, 2008).

El programa adoptó una estrategia de aproximaciones sucesivas para responder las tres preguntas de investigación. La primera etapa correspondió a un análisis de los cambios en el ingreso o el consumo per cápita, la incidencia de pobreza, y la distribución del ingreso o del consumo per cápita, en el período entre los dos últimos censos de población de cada país. El análisis se hizo para cada uno de 10 mil municipios, usando microdatos de 400 millones de personas, en 11 países y, en cada uno de ellos, en dos momentos en el tiempo. En todos los países se usó el mismo método (Small Area Estimates; Elbers et al. 2003) y del mismo tipo de fuentes (censos nacionales de población y encuestas nacionales de hogares que incluyen mediciones de ingreso o consumo), con excepción del estudio de Brasil (Favareto y Abramovay, 2009) que se basó en mediciones directas del ingreso de los hogares contenidas en los censos demográficos de dicho país.



La segunda etapa constó de cuatro proyectos exploratorios que estudiaron dinámicas de territorios específicos en Santo Tomás, Chontales, Nicaragua (Gómez y Ravnborg, 2012); Tungurahua, Ecuador (Ospina et al., 2012a); Cuatro Lagunas, Cusco, Perú (Escobal et al., 2012a) y Chiloé, Chile (Ramírez et al., 2012). Estos proyectos comenzaron a mediados del 2008 y terminaron a fines del 2009. En estos proyectos se probaron y ajustaron las preguntas de investigación, las hipótesis, los métodos y se construyó el sistema de colaboración inter-proyectos.

La tercera etapa en la estrategia de aproximaciones sucesivas a las preguntas del programa, fueron 15 estudios de caso en igual número de territorios en los 11 países¹, los que se iniciaron hacia mediados del 2009 y concluyeron a fines del 2010.

En total, tomando en cuenta todos los tipos de proyectos de la segunda y tercera etapas, la evidencia disponible proviene de 19 territorios en 11 países (cuadro 1). Estos territorios fueron elegidos en forma razonada a partir de los datos de Small Area Estimates. Primero se tomó la decisión de concentrarse en territorios con algún grado significativo de crecimiento económico². Dentro de ese subconjunto, se buscaron luego con diferencias en los cambios en incidencia de pobreza y de distribución del ingreso o del consumo. La lista larga de alrededor de 75 territorios, fue analizada por los equipos en los 11 países, buscando elegir un conjunto de casos que ilustrara dinámicas rurales importantes en América Latina en su conjunto, y donde estuvieran representadas en formas más o menos equilibradas las diferentes situaciones de crecimiento con mayor o menor grado de inclusión social. Son, por tanto, estudios de casos, y no son una muestra representativa de la realidad territorial latinoamericana. Esta decisión de mirar territorios con crecimiento pero que difieren en sus resultados de inclusión social y sustentabilidad ambiental, limita el uso que se puede hacer de los resultados cuando se trate de analizar territorios con estancamiento o regresión económica. Una vez elegidos los casos, en terreno y haciendo uso de fuentes secundarias y de entrevistas a informantes calificados, se determinó si la dinámica territorial era o no ambientalmente sustentable.

La identificación de los territorios comenzó con la selección de un grupo de municipios contiguos que tuvieran un mismo tipo de dinámica de cambio de indicadores de ingreso/consumo, pobreza y distribución de ingreso/consumo. Los conjuntos de municipios candidatos fueron visitados para determinar si se trataba solamente de agregados de municipios fruto de una coincidencia en el análisis estadístico, o si efectivamente se estaba en presencia de un territorio entendido como un espacio con un grado razonable de identidad socialmente construida (Schejtman y Berdegué, 2003).

¹ Se realizaron además seis investigaciones específicas sobre los sistemas de género y las dinámicas territoriales rurales, cuyos resultados son reportados en un libro en preparación bajo la dirección de Susan Paulson.

² Con posterioridad a la selección de los territorios y una vez avanzados los estudios de caso, se concluyó que en los territorios de Nicaragua no se había verificado crecimiento económico.



En general, el método empleado en estos estudios de caso es el de narrativas analíticas (Bates et al. 1998; Rodrik, 2003), es decir, el análisis de la evolución de un caso particular (un territorio) con referencia a un marco conceptual (Rimisp, 2008). Las narrativas analíticas apuntan especialmente a establecer la evolución de los procesos y mecanismos a través de los cuales se manifiestan en una situación concreta las relaciones y fenómenos previstos por el marco conceptual.

Los estudios de caso se llevaron a cabo entre mediados del 2009 y fines del 2010, e incluyeron análisis de información secundaria cuantitativa y cualitativa, entrevistas a informantes calificados dentro y fuera del territorio, talleres y grupos focales, y, en la mayoría de los casos, encuestas a muestras representativas de los hogares del territorio. Los equipos de investigación de los distintos países se reunieron cada seis meses aproximadamente conforme avanzaban los estudios de caso, para comparar métodos y resultados.

El presente documento se construyó tomando como punto de partida una síntesis preliminar elaborada con los resultados de los cuatro proyectos exploratorios. Dicho documento fue discutido en octubre 2010 en un taller de tres días de duración con participación de los coordinadores de los equipos de trabajo en los 11 países. Ahí se refrendaron los elementos principales del primer borrador de síntesis, y se incorporaron nuevos elementos y rectificaciones.

Entre enero 2011 y mediados del 2012 se llevará a cabo la última etapa del programa, que consiste en cinco proyectos temáticos que profundizan en algunas de las determinantes de las dinámicas territoriales identificadas en las etapas previas. Al término de esta cuarta etapa se producirá una nueva síntesis con las respuestas a las preguntas del programa. La síntesis que ofrecemos en este documento es, por lo tanto, provisional.



4.- Resultados

Cambios en ingreso per cápita, incidencia de pobreza y distribución del ingreso

La primera pregunta del programa es si acaso existen en América Latina territorios rurales que estén creciendo económicamente con inclusión social y con sustentabilidad ambiental. Como se indicó antes, los socios del programa analizaron los microdatos de censos de población y de encuestas nacionales de hogares correspondientes a 400 millones de personas en 10 mil municipios en 11 países; se empleó el método de Small Area Estimates de Elbers et al. (2003). Los resultados de este trabajo están reportados en otras publicaciones (Damianović et al. 2009; Escobal y Ponce 2008; Favareto y Abramovay 2009; Fernández et al., 2009; Flores et al. 2009; Gómez et al. 2009; Hinojosa et al. 2009; Larrea et al., 2008; Modrego et al., 2008; Romero y Zapil 2009; Yúnez-Naude et al. 2009) y hay un libro en preparación.

Ya en esta etapa encontramos un primer obstáculo infranqueable: los especialistas consultados confirmaron que no hay datos desagregados a escala de municipios o sus equivalentes, de cobertura nacional, y comparables en los 11 países, de variables o indicadores que puedan dar una estimación aproximada y agregada sobre la condición ambiental general de un territorio, como sí los hay para las dimensiones económica y social. Ello nos impidió incorporar la dimensión ambiental en el análisis de Small Area Estimates.



Tabla 2. Tipología de cambios en ingreso o consumo per cápita, incidencia de pobreza y distribución de ingreso en 11 países de América Latina¹

Tipo	En el período entre los dos últimos Censos de Población, hubieron cambios favorables y estadísticamente significativos en:			Municipios ²		Población	
	Ingreso o consumo promedio per cápita	Incidencia de pobreza	Distribución del ingreso o consumo promedio per cápita	Número	%	Número	%
1	Sí	Sí	Sí	1,260	12%	34,810,814	9%
2	Sí	Sí	No	2,129	20%	60,920,050	15%
3	Sí	No	Sí	120	1%	5,512,634	1%
4	Sí	No	No	736	7%	32,708,854	8%
5	No	Sí	Sí	1,034	10%	30,934,332	8%
6	No	Sí	No	395	4%	9,462,410	2%
7	No	No	Sí	1,388	13%	85,462,336	21%
8	No	No	No	3,359	32%	139,697,708	35%
Total				10,421	100%	399,509,138	100%

1 Datos de Damianović et al. (2009); Escobal y Ponce (2008); Favareto and Abramovay (2009); Fernández et al. (2009); Flores et al. (2009); Gómez et al. (2008); Hinojosa et al. (2009); Larrea et al. (2008); Modrego et al. (2008); Romero et al. (2009); Yúnez-Naude et al. (2009).

2 Provincias en Perú y Parroquias en Ecuador; en los demás países, municipios o sus equivalentes.

Por ende, la respuesta a la primera pregunta del programa, hasta ahora, solo abarca tres variables: cambios en el ingreso o el consumo per cápita, cambios en la incidencia de la pobreza monetaria, y cambios en la distribución del ingreso o del consumo per cápita. Tenemos plena conciencia de que ni el crecimiento económico está plenamente representado por el cambio en los niveles de ingreso per cápita y, sobretodo, que inclusión social es más que la combinación de incidencia de pobreza monetaria y distribución del ingreso o del consumo per cápita (Stiglitz et al. 2009). Sin embargo, creemos que los indicadores de cambio en el ingreso per cápita o consumo per cápita, en la incidencia de pobreza monetaria, y en la distribución del ingreso o del consumo per cápita, dan una idea aproximada pero plausible y resumida de las tendencias relativas del crecimiento económico y del bienestar social de estos 10 mil municipios.

El análisis arrojó resultados que se resumen en el cuadro 2. Casi 10% de la población de 11 países vive en 1260 municipios que han experimentado cambios positivos en ingreso o consumo per cápita, incidencia de pobreza y distribución de ingreso o consumo. Es decir, los resultados dan indicios que el crecimiento con reducción de pobreza y mejoramiento de la distribución del ingreso, es posible en América Latina, aunque claramente es la excepción más que la regla.

Por los estudios de caso, sabemos que algunos de los territorios cuyos municipios tuvieron cambios económicos y sociales positivos, también tienen dinámicas de desarrollo que parecen ser ambientalmente sustentables (lo que no significa que no existan impactos ambientales específicos). Por ejemplo, la dinámica de fuerte crecimiento con gran reduc-



ción de pobreza y sin mejoramiento en la distribución del ingreso del territorio de Chiloé Central, se demostró como no sustentable, cuando los equilibrios ambientales fueron superados con la aparición de una nueva enfermedad de los salmones (Ramírez et al., 2012). En cambio, las dinámicas en el territorio de Villamontes, en Tarija, Bolivia, que giran en torno a la explotación de hidrocarburos, parecen básicamente sustentables, a pesar de algunos impactos ambientales (Hinojosa et al., 2012). Cabe mencionar que también tenemos ejemplos de territorios, como el del Macizo de Peñas Blancas, en Nicaragua, donde no ha habido ni crecimiento económico ni reducción de la pobreza o mejoramiento en la distribución del ingreso, pero donde estas dinámicas de estancamiento sí son ambientalmente sustentables (Gómez et al., 2010).

En todo caso, podemos estimar que cerca de 12% de los municipios de esos 11 países de América Latina, han sido capaces de generar dinámicas de crecimiento del ingreso per cápita, con cambios positivos en pobreza y distribución del ingreso, y con sustentabilidad ambiental. El crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental es posible, pero improbable, y la inmensa mayoría de la población de América Latina vive en la realidad de gestionar conflictos entre los objetivos de crecimiento, la inclusión social y la sustentabilidad ambiental.

Es importante hacer notar que los territorios con crecimiento económico con reducción de pobreza y mejoramiento en la distribución del ingreso, se encuentran tanto en países que en el período estudiado han tenido tasas agregadas de alto crecimiento y fuerte reducción de pobreza (por ejemplo, Brasil), como en otros que han tenido un peor desempeño agregado a nivel nacional (por ejemplo, Honduras). Es decir, para tener territorios que crecen con grados importantes de inclusión social, no es indispensable tener un entorno macroeconómico e institucional favorable, aunque, por supuesto, ayuda mucho.

Lamentablemente, la categoría más importante es la de territorios en los que nada mejoró en el período analizado en el país: ni el ingreso per cápita aumentó, ni la incidencia de pobreza se redujo, ni el ingreso se distribuyó mejor. Un tercio de los municipios, donde vive un tercio de la población, están en esta situación deplorable. Encontramos estos territorios en todos los países estudiados.

El 40% de los municipios mostró crecimiento del ingreso o consumo per cápita, indicativo de crecimiento económico (y es a este subconjunto que se refieren los estudios de caso). Pero aún en países como Chile o Brasil que en la década tuvieron una bonanza económica, nuestros datos indican que fue una minoría de los territorios donde se concentró el crecimiento (Modrego et al., 2008; Favareto y Abramovay, 2009).

Una buena noticia es que casi la mitad de los 10 mil municipios vieron disminuir la incidencia de la pobreza en el período estudiado. En 70% de los municipios donde hubo este tipo de cambio, también hubo crecimiento del ingreso per cápita. Ello indica que hay un



grupo importante de municipios donde la reducción del ingreso probablemente se debe más a la recepción de remesas familiares y/o de subsidios sociales, que a procesos localizados de crecimiento económico; un ejemplo de esta situación es el territorio de la ribera Norte del Humedal de Cerrón Grande, en El Salvador, analizado por Gómez y Cartagena (2012). Valdría la pena en futuras investigaciones hacer un análisis comparativo de las dinámicas de territorios que hayan reducido pobreza a través de estos diferentes mecanismos.

Las dinámicas de crecimiento del ingreso/consumo per cápita con reducción de pobreza están presentes en el 32% de los municipios, donde vive el 24% de la población. Las dinámicas de crecimiento con reducción de la desigualdad son mucho menos frecuentes (13% de los municipios donde vive el 10% de la población). Claramente el desafío de la equidad de la distribución del ingreso, es considerablemente más complejo que el de la reducción de la pobreza. La causa fundamental, nos parece, es que entre crecimiento económico y reducción de pobreza hay una fuerte correlación negativa, por lo que las políticas pro-crecimiento en términos generales crean mejores condiciones (aunque no son suficientes por sí mismas) para reducir la incidencia de la pobreza. Por el contrario, la relación entre crecimiento económico y mejor distribución del ingreso es mucho menos favorable a esta última e implica tarde o temprano redistribuciones de poder. Por tanto, la economía política de mejorar la distribución del ingreso, es endiabladamente más compleja que la de la reducción de la pobreza; todos somos anti-pobreza, pero muchos menos somos pro-igualdad.

Finalmente, y esto no es algo que se desprende del cuadro 2 sino del análisis detallado de los 11 informes nacionales con sus respectivos mapas: aunque hay algunos territorios "exitosos" que se caracterizan por tener ventajas comparativas basadas en factores de producción o en su geografía, se observa que hay muchos municipios exitosos ahí donde no esperaríamos encontrarlos, al igual que hay muchos territorios no exitosos que, si solo dependiera de su dotación de factores o de su localización, deberían sobresalir por su crecimiento con inclusión social. Por ejemplo, en Brasil encontramos más casos de avance en las tres dimensiones en el Sur del país, que en la región Centro Oeste, que en el Nordeste (cuadro 3). Sin embargo, en la región mejor dotada de recursos naturales, con más infraestructura, mejor articulada a los mercados (es decir, el Sur), tenemos que 44% de los municipios no demuestran crecimiento en el ingreso con reducción de la incidencia de la pobreza, incluyendo un 30% de los municipios que reducen pobreza pero sin un incremento en el ingreso per cápita, es decir, debido probablemente al efecto de políticas sociales más que por causa de crecimiento económico. De forma análoga, en la región relativamente menos propicia para el crecimiento económico con inclusión social en muchos sentidos (el Nordeste), tenemos que 39% de los municipios tienen cambios favorables tanto en ingreso per cápita como en reducción de pobreza.



Tabla 3. Cambios en ingreso per cápita y en incidencia de pobreza en tres regiones del Brasil, 1991-2000

Cambios	Noreste	Centro-Oeste	Sur
Cambios en ingreso per cápita			
Aumento significativo	44	51	63
Sin cambio favorable significativo	56	49	37
Total	100	100	100
Cambio en incidencia de pobreza			
Disminución significativa	71	77	86
Sin cambio favorable significativo	29	23	14
Total	100	100	100
Cambio en ingreso per cápita y en incidencia de pobreza			
Cambio favorable en ambos indicadores	39	42	56
Aumento significativo de ingreso, sin disminución significativa de pobreza	5	10	7
Disminución significativa de pobreza, sin aumento significativo de ingreso	32	36	30
Sin cambio favorable en ninguno de los dos indicadores	25	13	7
Total	100	100	100

Fuente: Autores con datos de Favareto y Abramovay (2009)

En síntesis, los resultados muestran una realidad geográficamente heterogénea de las dinámicas de crecimiento y desarrollo reciente en América Latina. Nuestros trabajos indican que heterogeneidad no se manifiestan de manera aleatoria en el espacio (Modrego et al., 2008a), lo que es consistente con los resultados de otros autores (Rey y Janikas, 2005; Aroca et al., 2006; Ezcurra and Rapun, 2006; Ellison y Gleaser, 1997). Pero esto no quiere decir que se explique solamente a partir de las diferencias relativas en la dotación de activos y capitales, ni en el potencial de mercado de los distintos espacios subnacionales. Bentacor et al. (2008) por ejemplo, muestran cómo la pobreza rural en Chile es mucho más sensible a cambios en el crecimiento y la distribución del ingreso en algunas zonas del país respecto de otras, resultados que no responden a patrones evidentes asociados a la geografía. Escobal y Ponce (2011), por su parte, muestran que aun controlado por todos los factores obvios del crecimiento, existe "algo más" que ayuda a explicar la variabilidad de resultados del desarrollo en las distintas zonas de Perú, que se atribuyen en última instancia a diferencias institucionales. Esta idea es consistente con la posibilidad de "trampas de desigualdad" localizadas, resultantes de mecanismos e instituciones económicas, políticas y socio-culturales que preservan dinámicas de exclusión (Buorignon et al., 2007; Rao, 2006) en el ámbito territorial. Entendiendo que estas trampas llevan a los distintos espacios subnacionales a no expresar su real potencial, es posible



pensar en enfoques territoriales del desarrollo diseñados bajo un balance de criterios de necesidad y oportunidad (Olfert et al., 2011).

Lo que se desprende de estos resultados, es en definitiva que el efecto de un activo o conjunto de activos en un territorio en particular, dependerá de su interacción con otras condicionantes locales, aun si, en promedio y como agregado nacional, sabemos que una mayor dotación de dicho activo tendrá determinado tipo de efecto sobre la pobreza o el crecimiento o la distribución del ingreso. El análisis de las dinámicas territoriales tiene que ver precisamente con entender esas relaciones locales que hacen que lo que es observado o es previsible a partir de los promedios o agregados nacionales, no suceda tal cual a nivel local.

Estos resultados nos permiten concluir que los resultados de las dinámicas territoriales no dependen solamente de la localización o de la dotación de activos de las macroregiones o de los territorios o de los hogares y personas que viven en ellos. Hay "algo más" que no es capturado por las variables en que típicamente se concentran las políticas de desarrollo rural, aun aquellas con enfoque territorial. La hipótesis del programa (Rimisp, 2008) es que los marcos institucionales y los actores sociales y sus coaliciones, son una parte importante de la respuesta.

Determinantes de las dinámicas territoriales

Con los resultados de los proyectos en los 19 territorios, podemos afinar la propuesta del programa DTR: en América Latina las trayectorias de desarrollo territorial son el resultado de la acción de coaliciones sociales, las que se forman y consolidan en procesos muchas veces de larga duración, al calor de las interacciones de los actores en torno a cinco factores principales: estructura agraria y capital natural, mercados, estructuras productivas, ciudades ligadas a los territorios, e inversión pública. Las relaciones entre los actores en las coaliciones sociales, y la acción de las coaliciones en torno a los cinco factores indicados, están reguladas o estructuradas por las instituciones que efectivamente operan en el territorio. Estas instituciones pueden ser formales o informales, y endógenas o exógenas al territorio, pero finalmente constituyen las reglas del juego del desarrollo territorial. Se trata, por cierto, de una hipótesis que está sujeta a ser puesta a prueba y que el propio programa está evaluando a través de cinco proyectos temáticos ya iniciados y que concluirán a mediados del 2012.

Coaliciones sociales

La pieza clave para el logro de círculos virtuosos localizados de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental, parece ser la formación y desarrollo de coaliciones sociales que a lo largo del tiempo construyen el poder y el proyecto necesarios para imprimir un sentido diferente al desarrollo de sus territorios, que les permite escapar de la suerte que observamos en la mayoría de los territorios de la región. Estas coa-



liciones sociales emergen del juego de intereses entre quienes forman parte de ellas en relación con los cinco factores que discutiremos más adelante.

El documento que da origen al programa Dinámicas Territoriales Rurales define a estas coaliciones sociales de la siguiente forma³ (Rimisp, 2007): "Alianzas de actores que compiten por el control de la distribución de los recursos y beneficios tangibles e intangibles. Estos grupos de actores pueden estar en conflicto (activo o latente) con otras coaliciones o con otros grupos de actores, por ejemplo, por el acceso a los recursos naturales o financieros, por las prioridades de inversión pública, por los patrones tecnológicos, o por el poder político local."

En todo territorio ("un espacio socialmente construido", al decir de Schejtman y Berdegú, 2003) hay actores sociales, algunos de ellos endógenos y otros exógenos en el sentido que residen fuera del territorio, lo que no obsta para que sus acciones y omisiones impacten en las dinámicas territoriales. Estos actores se relacionan entre sí, y participan en diversas formas de acción colectiva. Pero no en todos los casos dichas relaciones y acciones colectivas toman la forma de una coalición social, y menos aún toda coalición social es portadora de un proyecto de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental, o capaz de realizar dicho proyecto especialmente cuando contraviene los "proyectos territoriales" de otros actores o coaliciones.

Los resultados de los estudios de caso nos permiten proponer provisionalmente que las coaliciones sociales que son responsables por dinámicas de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental tienen algunas características comunes. En primer lugar, tienen una composición social de base amplia; integran a sectores relevantes de dentro y de fuera del territorio, entre los cuales hay determinados consensos tácitos o explícitos que no impiden que persistan diferencias y conflictos importantes entre ellos. Al ser de base amplia, significa que no son coaliciones de pobres con pobres, ni solo entre ricos y poderosos, sino que son expresión de la sociedad realmente existente o de buena parte de ella, lo que no significa que no existan sectores excluidos de, o perjudicados por, tal conjunto social.

El caso más claro de una coalición de base amplia de entre los analizados por el programa, es el de Tungurahua, Ecuador, descrito por Ospina et al. (2012a). En esta provincia de la sierra de Ecuador, desde hace al menos un siglo se inicia un proceso gradual de formación, crecimiento y diversificación de una economía que articula agricultura, manufactura y servicios, todos ellos en base a pequeñas y medianas empresas controladas por habitantes del territorio. Son miles las empresas que hacen parte de este entramado, y entre todas extienden sus redes comerciales y de negocios a todo el Ecuador. Esta estructura productiva es acompañada por redes sociales y políticas que expresan los inter-

³ Llamándolas "coaliciones distributivas."



eses y el proyecto de desarrollo de los pequeños y medianos empresarios, a veces en complicidad y a veces en conflicto abierto con otros poderes económicos y políticos externos al territorio, incluyendo los de las ciudades principales de Quito y Guayaquil. La red de ferias comerciales que caracteriza a Tungurahua y la ciudad de Ambato, son los espacios donde se articulan buena parte de estas relaciones. El actual gobierno Provincial de Tungurahua (considerado por muchos como el más innovador de los del Ecuador) es expresión de esta coalición.

Valle Sur-Ocongate, en Perú, ejemplifica coaliciones que tienen su base en actores locales, con un papel protagónico de las comunidades campesinas, la tecnocracia local surgida y formada al calor de los programas de desarrollo de las ONG y las entidades públicas peruanas, y, más reciente, de los gobiernos locales empoderados por el acceso a importantes recursos de inversión provenientes del canon minero y por el ascenso de un nuevo tipo de liderazgo político local, "indigenista modernizante" como lo llaman Hernández y Trivelli (2012). Son coaliciones con una agenda de desarrollo muy incluyente y pro-pobre. Son, también, coaliciones muy locales y fragmentadas, con un limitado potencial de llevar adelante procesos de mayor envergadura que aquellos que se pueden sustentar en los presupuestos municipales; logran contribuir al crecimiento y a la reducción de la pobreza, pero en forma modesta, y sus principales impactos probablemente sean aquellos que tienen que ver con la reivindicación cultural y el debilitamiento de las instituciones responsables de la exclusión por razones étnicas.

Un caso contrastante es el de Chiloé, Chile, donde la coalición dominante se articula en torno a actores externos al territorio, como son las empresas salmoneras, que son el eje de la coalición (Ramírez et al., 2012). Hacen parte de esta coalición muchos funcionarios de las agencias públicas ligadas al fomento productivo, al desarrollo de la pesca y acuicultura, y a la innovación. Los trabajadores y pequeños y medianos empresarios de Chiloé, cuyas oportunidades de desarrollo dependen del crecimiento de la industria del salmón, también integran esta alianza. Su poder no tiene contrapeso durante toda la etapa de expansión de la industria, por lo que logran una influencia enorme en los procesos de diseño y ajuste de las leyes y reglamentos que regulan a la misma industria, los que excluyen por completo la participación de actores territoriales. La coalición alternativa, con un discurso ambientalista e identitario, prácticamente no tiene eco ni social ni político, hasta que sobreviene la crisis ambiental del salmón en el 2007-2008. En ese momento la coalición dominante sufre tensiones internas y cuestionamientos externos y la voz crítica de la coalición ambiental gana visibilidad y algo más de influencia. Sin embargo, la coalición salmonera finalmente logra mantener el control del proceso de reconfiguración institucional y de los programas dirigidos a enfrentar y superar la crisis ambiental y sanitaria, si bien modifica en algún grado su discurso para dar un mayor espacio a las consideraciones ambientales y a las obligaciones sociales de la industria para con los territorios en que opera.

En los territorios bolivianos analizados en el artículo de Hinojosa et al. (2012), se explica el proceso de constitución y las formas de operar de coaliciones de las élites locales, sus-



tentadas en redes familiares que derivaban su poder de una economía de base agraria pero crecientemente diversificada. Estas colaciones han sido capaces de conducir el desarrollo de sus regiones durante largo tiempo, y han sido relativamente exitosas en negociar la posición de sus territorios aun durante coyunturas tan críticas como la "guerra del gas" a partir de inicios de la década del 2000. De hecho, estas coaliciones enfrentan en forma original las oportunidades derivadas de las nuevas rentas provenientes de la explotación de los hidrocarburos; la consigna "sembrar el gas" expresa una voluntad o proyecto de fortalecer sus propias bases de sustentación haciendo uso de los nuevos recursos.

Jauja, en Perú, es un territorio que parecía predestinado a ser exitoso. Desde épocas antiguas se había consolidado ahí una estructura agraria dominada por la pequeña agricultura comercial; cuenta con buenos suelos y buen clima; está próximo y bien comunicado con la ciudad de Lima, a la que desde la era colonial proveyó de alimentos. Pero como se puede ver en detalle en el artículo de Escobal et al. (2012b), entre otros factores que explican el estancamiento de Jauja, se destaca la carencia de coaliciones sociales fuertes, debido en parte a las debilidades de los actores sociales locales y al excesivo fraccionamiento del poder público local por la fuerte tradición localista que también viene de antaño. Ambos factores a su vez se relacionan con la inexistencia de una ciudad intermedia en el territorio con el peso suficiente para ser motor y eje de algo más que la suma de 32 distritos rurales.

El caso de Yucatán, México, analizado por Yúnez-Naude et al. (2012), representa la situación de una coalición organizada y dirigida en forma estable por el poder político y el sistema de control corporativo y clientelar que caracterizó a los gobiernos priistas durante décadas. A través de un sinnúmero de organizaciones sociales que eran una extensión orgánica del partido-gobierno, el poder central y sus expresiones locales articularon la política y la vida social y económica del territorio. Esta coalición sostuvo con el erario público durante muchos años la economía del henequén, desde la producción hasta el procesamiento y la comercialización. Las reformas neoliberales conducen, en 1992, al término definitivo del apoyo público a la agricultura e industria del henequén, las cuales colapsan. La economía del territorio cambia radicalmente de rumbo con el surgimiento, primero, de la maquila textil y, luego, de los servicios ligados al turismo. Sin embargo, la expresión local del poder central logra mantener su papel rector en la organización de las coaliciones locales, esta vez a través del control de un conjunto de programas públicos que canalizan numerosos subsidios y transferencias condicionadas y apoyos productivos tanto a los agricultores, a otras PYME y a las personas y hogares.

Las coaliciones sociales deben tener poder para realizar sus objetivos. Este poder se deriva en recursos tangibles e intangibles que al ser puestos en juego resultan suficientes para conseguir resultados y efectos que convienen a los intereses de la propia coalición. Estos recursos corresponden a diferentes combinaciones de capital económico, capital



social, capital cultural y capital político, sin que ello signifique que las coaliciones sociales innovadoras tienen altas dotaciones simultáneas de cada una de estas formas de activos. El poder de una coalición puede derivarse, por ejemplo, de su capacidad de movilización social y política, y no depende siempre de la posesión de recursos económicos. En el caso de Chiloé presentado por Ramírez et al. (2012), prima el capital económico como motor de vinculación social dentro y fuera del territorio, una millonaria inversión por parte de la industria del salmón y del sector público, que repercute en la generación de empleo y logra convocar a un arco diverso de actores. En Cuatro Lagunas (Escobal et al. 2012a) es el capital social y el control colectivo de la tierra y el agua, ambos derivados de las instituciones de la comunidad indígena andina, los factores que articulan una coalición que abarca en un primer momento a los actores de la cooperación internacional y de algunas agencias gubernamentales de desarrollo, y más recientemente a los gobiernos municipales empoderados por los ingresos del canon minero.

Si miramos la evolución socio-política del territorio de Santo Tomás, Nicaragua a lo largo de 150 años, constatamos una dinámica en la cual la propiedad de la tierra desde mediados del siglo IX fue la base para la construcción del capital social y político de la élite latifundista, el que fue incluso suficiente para sobrevivir a la expropiación de la tierra durante la reforma agraria y recomponer una estructura agraria nuevamente concentrada, que a su vez les ha permitido incrementar nuevamente su capital social y político, sumando esta vez ya no a dictadores como Somoza, sino a la coalición a funcionarios públicos y de la cooperación internacional que controlan flujos de inversión en el territorio (Gómez y Ravnborg, 2012).

En tercer lugar, las coaliciones sociales tienen un proyecto territorial (algunas veces explícito pero muchas veces tácito). Este proyecto se sustenta en un discurso, vale decir, en las creencias, ideas, normas y valores que predominan en la coalición y que le permiten definir lo que es deseable, lo bueno y lo malo, los aliados y los adversarios, lo que conviene y lo que es una amenaza, los medios legítimos y los ilegítimos para alcanzar sus objetivos. Escobal et al. (2012a) explican que en el territorio de Cuatro Lagunas está en curso un proceso en el que compiten al menos tres proyectos de desarrollo, cada uno llevado adelante por coaliciones que sin diferir demasiado en los actores que las componen, si sustentan sus visiones en diferentes discursos. Por un lado están aquellos que reivindican la tradición comunitaria andina, con sus instituciones y valores que privilegian la identidad y la igualdad a partir del control colectivo de los recursos naturales. Están también quienes, desde la comunidad y sin cuestionar su existencia, se plantean cambios a las instituciones locales para dar más espacio a la iniciativa individual y grupal, lo que implica favorecer o al menos aceptar procesos de diferenciación social y de cierta concentración de recursos; este grupo cuenta con el respaldo de técnicos de agencias públicas y privadas portadoras de un proyecto de desarrollo modernizante del territorio. En los últimos años surge un tercer sector, que son las municipalidades distritales, fuertemente empoderadas por el acceso a importantes flujos de financiamiento derivados del canon minero, así como por contar con una tecnocracia local integrada por personas formadas al calor de los numerosos y variados proyectos de desarrollo que la cooperación



internacional y el gobierno peruano han implementado en este territorio; probablemente este tercer actor tenga muchos puntos de encuentro con el segundo grupo.

No en todos los territorios se conforman coaliciones sociales capaces de incidir en sus trayectorias. Muchas veces se estructuran alianzas que no alcanzan a consolidar el poder necesario para generar un influjo, como sucede en Cerrón Grande, en El Salvador, donde recién se comienza a esbozar la emergencia de una interrelación de agentes abocada a conflictos ambientales; o en Jauja, Perú, donde la debilidad de una élite política, la fragmentación administrativa y la ausencia de una base institucional no permite afianzar una coalición social interna.

Estas coaliciones sociales presentan complejas estructuras. Las coaliciones sociales realmente existentes no son monolíticas y en ellas atributos positivos suelen combinarse con otros que pueden afectar negativamente los objetivos de crecimiento, reducción de la pobreza y mejora de la equidad en todas sus dimensiones (género, grupos sociales, grupos de edad, grupos étnicos, etc.). En el Secano de O'Higgins, por ejemplo, algunos organismos públicos dedicados al desarrollo rural y los pequeños agricultores de la zona, impulsaron un fuerte programa para asegurar los derechos de propiedad de estos últimos sobre el agua subterránea para el consumo humano y para el riego; de esta forma, se generaron positivos efectos de inclusión social, pero a la vez se agravó el problema de explotación excesiva de las napas subterráneas porque ni esta alianza ni ninguna otra coalición, en ningún momento apoyaron ni menos impulsaron políticas de restringir el acceso al recurso con miras a asegurar su sustentabilidad (Modrego et al., 2012).

Proponemos que las coaliciones sociales surgen, adquieren poder y formulan su proyecto, en la interacción de los actores sociales con cinco factores estructurales. A continuación revisaremos cada uno de estos elementos.

Capital natural y estructura agraria

El capital natural de que está dotado un territorio rural acota las opciones de desarrollo que están disponibles para esa sociedad (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Las estrategias de vida de buena parte de la población de los territorios rurales dependen fuertemente de los servicios ambientales. La forma en que un territorio gestiona su capital natural y los servicios ambientales que se derivan del mismo, tiene un efecto directo sobre las combinaciones de crecimiento, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

Los marcos institucionales y los actores y coaliciones sociales, median la relación entre capital natural y dinámicas territoriales y sus efectos. Por ello, no existe una relación unívoca entre capital natural y los efectos de las dinámicas territoriales. En consecuencia, no es siempre cierto que una mayor dotación de capital natural resultará en dinámicas de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Las interacciones sociales en



torno al acceso a y el uso de los recursos naturales, incluyendo los procesos de conflicto pero también los de cooperación, tienen un papel creciente en la emergencia de coaliciones sociales y en el forjamiento de sus discursos y proyectos territoriales. El territorio de Tungurahua, en Ecuador, no cuenta con una dotación de capital natural que lo distinga especialmente de otras provincias vecinas en la sierra Ecuatoriana, pero la acción colectiva de pequeños y medianos productores y comerciantes desde al menos el siglo XIX, permitió construir una extensa red de irrigación y caminos interiores que compensaron las desventajas naturales (Ospina et al., 2009, 2011, 2012a). Tungurahua se distingue por ser una de las escasas provincias ecuatorianas que muestran una dinámica de crecimiento con reducción de pobreza y desigualdad (Larrea et al., 2008).

Durante décadas el territorio del Secano (zona de temporal) de la provincia de O'Higgins, en la costa central de Chile, era conocido por su pobreza, estancamiento económico y, también, por sus procesos de degradación de la calidad del suelo a raíz de la deforestación ocurrida en el siglo XIX para permitir una expansión agrícola que resultó no sustentable. Como señalan Modrego et al. (2012) en el trabajo sobre el Secano de O'Higgins, un conjunto de cambios legales que alteraron las reglas de acceso y uso del agua del subsuelo en que se basa tanto el riego como el consumo humano, aunados a la inversión gubernamental en caminos, electrificación y otros bienes públicos, catalizaron la llegada de medianas y grandes empresas agrícolas y agroindustriales que han transformado radicalmente la economía, la sociedad y el medio ambiente del territorio.

Los territorios de Jauja, en la Sierra Central del Perú, y de Santo Tomás, en Chontales, Nicaragua, son ilustrativos de la situación inversa a la de Tungurahua y O'Higgins. Esos dos territorios se caracterizan por una dotación de recursos naturales relativamente favorable, que les ha permitido durante largos períodos ser abastecedores importantes de productos agrícolas (Jauja) y ganaderos (Santo Tomás). En Jauja, sin embargo, los actores sociales del territorio han sido incapaces de mantener vigente la posición competitiva de su territorio como fuente de alimentos para Lima (Escobal et al., 2012b). En Santo Tomás, la acción de los grupos sociales más poderosos les permitió revertir la Reforma Agraria de los años 80, reconcentrar la propiedad de la tierra, y capturar en su beneficio las significativas inversiones (caminos y desarrollo de cooperativas ganaderas) tanto del gobierno como de la cooperación internacional (Gómez y Ravnborg, 2012). El resultado en ambos territorios son dinámicas caracterizadas por bajo o nulo crecimiento económico, sin disminución ni de la pobreza ni de la concentración del ingreso. Ambos territorios, además, enfrentan desafíos ambientales importantes, en Jauja por una creciente escasez de agua y en Santo Tomás producto de una fuerte deforestación.

Hay también, por supuesto, territorios en que los efectos de la favorable dotación de capital natural se ven potenciados por un positivo desarrollo institucional, desde épocas tempranas. Es el caso del litoral de Santa Catarina, en Brasil, reportado por Cerdan et al. (2012).



La estructura agraria, es decir, la tenencia de la tierra (y el agua) y las estructuras sociales a ella correspondientes, tienen una particular importancia en estos territorios rurales. A igualdad de otras condiciones, a mayor equidad en la distribución de la tierra a lo largo de la historia del desarrollo del territorio, mayor es la probabilidad de observar dinámicas de crecimiento con inclusión social. Esto, porque la mayor equidad de oportunidades, es decir, la equidad en el acceso a activos favorece tanto el crecimiento como la disminución de pobreza y facilita un mayor y más amplio acceso a redes, relaciones y activos adicionales necesarios para aprovechar o manejar las oportunidades de crecimiento y distribución de ingresos. En una dimensión no económica, es bien conocido que la tenencia y el acceso a la tierra y el agua, condicionan los proyectos y discursos políticos y culturales tanto de los poseedores como de los desposeídos y en las relaciones de poder entre ellos y, de esta forma, inciden en los proyectos territoriales.

Atípicamente para América Latina, hay territorios que tuvieron una mejor distribución de la tierra desde épocas históricas tempranas y donde por tanto nunca hubo un peso dominante de la hacienda, como en los casos analizados de Jauja y Cuatro Lagunas, en Perú (ambos de Escobal et al. 2012a y 2012b); Tungurahua, Ecuador (Ospina et al. 2012); el litoral de Santa Catarina en Brasil (Cerdan et al. 2012), o Chiloé, en Chile (Ramírez et al. 2012). Ahí la economía se organizó tempranamente con base en el trabajo de pequeños propietarios o de comuneros dedicados a la agricultura, la ganadería y/o la pesca artesanal. Con intensidades y velocidades variables que dependían del grado de vinculación de esos territorios con mercados dinámicos, en algunos de esos territorios equitativos en cuanto a la tenencia de la tierra, el estrato de pequeños productores agrícolas dio origen a clases de artesanos, pequeños industriales y comerciantes. El fenómeno fue más fuerte en lugares como Jauja y Tungurahua, tempranamente ligados a mercados importantes, que en territorios que por décadas y a veces por siglos se mantuvieron relativamente distantes de dinámicas comerciales extra-territoriales, como Chiloé y Cuatro Lagunas.

Otros territorios se asemejan a los anteriores en el sentido que una estructura agraria relativamente igualitaria facilitó procesos de desarrollo bastante inclusivos, pero se diferencian en que el acceso a la tierra es un fenómeno relativamente reciente (siglo XX) y derivado de políticas de reforma agraria más que de los procesos originales de ocupación del espacio. El territorio de Valle Sur-Ocongate, Perú, que discuten Hernández y Trivelli (2012), ilustra esta situación. Cabe destacar, como demuestra el caso de Santo Tomás, Nicaragua, que no toda reforma agraria logra como efecto que la transferencia de tierra a los campesinos se convierta en una palanca de desarrollo socialmente inclusivo: ahí, en solo 30 años se transitó desde el latifundismo, a una estructura de tenencia de la tierra más equitativa derivada de la reforma agraria sandinista, a una re-concentración radical de la tierra (Gómez y Ravnborg 2012). El caso de Yucatán, descrito por Yúnez-Naude et al. (2012) representa un territorio con distribución de la tierra relativamente equitativa como consecuencia de una profunda reforma agraria, pero donde la actividad agrícola central colapsa al calor de las reformas neoliberales implementadas en México a partir de



la década de 1980, poniendo en jaque la viabilidad económica de la agricultura familiar comercial.

Hay otro grupo de territorios donde las dinámicas de desarrollo nacen marcadas por el enorme peso de la hacienda y la estructura agraria dual que caracteriza a la mayor parte de América Latina rural. Entre los casos analizados por el programa, ilustran esta situación los territorios de Carirí, en Paraíba, Brasil (Favareto et al.); Jiquiriça, en Bahía, Brasil (Quan et al.), y; Susa y Simijaca, en Colombia (Arias et al.).

Las relaciones sociales propias de esa estructura agraria dual, impidieron el surgimiento de cualquier clase de pequeños y medianos empresarios agrícolas o no agrícolas. Los sectores subordinados carecieron no solo de oportunidad de acceso a los más importantes activos, sino, además, de espacio para desarrollar los tipos de habilidades sociales (Fligstein, 2001) que son requeridas para emprender y para constituirse en actores económicos significativos. Como señalan Favareto et al. (2012), la estructura agraria propia del territorio de Cariri, similar a la de gran parte del Nordeste brasileño, significó que los grandes hacendados, los llamados "coroneles", tuvieran la llave de acceso a cualquier fuente de ingreso gracias a su control sobre el restringido mercado de trabajo y sobre las fuentes de alimentos; además, esta reducida élite controlaba el acceso al sistema político formal y los mecanismos de resolución de los conflictos locales.

No es del todo sorprendente, por lo tanto, que en esos lugares los sectores sociales subordinados hayan tenido enormes dificultades para capitalizar oportunidades históricas derivadas de cambios institucionales originados fuera del territorio. El trabajo de Favareto y sus colaboradores (2012), muestra cómo en Carirí, Brasil, tierra de latifundistas y de peones durante siglos, las recientes políticas a favor de la pequeña agricultura y, sobre todo, las masivas transferencias sociales, no han logrado apalancar el desarrollo de una agricultura familiar pujante e innovadora, sino que dan forma a nuevas relaciones de dependencia y clientelismo, ahora de los gobiernos locales, las agencias gubernamentales especializadas, y los aparatos políticos detrás de ellas. En Santo Tomás, Nicaragua, una mayoría de los campesinos beneficiarios de la reforma agraria pierden rápidamente sus tierras al calor de procesos territoriales de dinamización económica estimulados por las políticas gubernamentales y las inversiones públicas y por la cooperación internacional; muchos de ellos migran a otras regiones del país o del extranjero (Gómez y Ravnborg, 2012). Como señalan Arias et al. (2012) en su estudio de Susa y Simijaca, la estructura agraria dual consolidada en este territorio colombiano desde la entrega de encomiendas a mediados del siglo XVI, 500 años después sigue determinando la participación de campesinos y hacendados en las nuevas oportunidades y beneficios del boom lechero que caracteriza a este territorio.

Vínculos con mercados dinámicos

El segundo factor es la relación del territorio con mercados dinámicos. Es decir, el grado de acceso e intercambio del territorio con mercados –de diferentes tipos, como laborales, de bienes, de servicios, de consumo, de crédito– de suficiente tamaño como para estimu-



lar tasas importantes de crecimiento en forma sostenida por períodos largos de tiempo. Por lo general, estos mercados son externos al territorio rural, pudiendo ser regionales, nacionales o internacionales. A igualdad de otras condiciones, los vínculos con mercados dinámicos desde épocas tempranas, favorecen dinámicas de acumulación y crecimiento. Una vez más, la combinación de elementos es lo decisivo: la interacción prolongada de mercados importantes de parte de actores de territorios dotados de estructuras agrarias menos desiguales, favorece un crecimiento económico con mayor inclusión social. Esta combinación la observamos en mayor o menor medida en Tungurahua, en Ecuador; en Jauja, Perú; y en Jiquirica, Brasil; todos ellos territorios caracterizados durante décadas y aun siglos, por estructuras agrarias con predominio de la pequeña propiedad y una relación fuerte con mercados dinámicos, sustentada en los tres casos en la posición geográfica del territorio respecto de los principales centros de producción y/o consumo.

En el territorio ecuatoriano de Tungurahua se observa una larga historia de comercio interregional sustentado en un sistema de ferias locales y regionales donde convergen diferentes actores sociales y económicos, así como en la ubicación estratégica entre la sierra y la costa (Ospina et al., 2012a). Ese vínculo fuerte de Tungurahua con diversos mercados dinámicos, fue convertido por los actores locales en capital social, económico y político y en proyecto territorial. Jauja, que secularmente ha estado ligada a los mercados de Lima y Huancayo para el abastecimiento de productos agrícolas de consumo básico, no ha conseguido traducir esta ventaja en una dinámica exitosa, debido al menos en parte a que los actores políticos y económicos no pudieron constituir una coalición que superara el fraccionamiento económico, social y político que es expresión de realidades muy locales, sub-territoriales (Escobal et al., 2012b).

En Santa Catarina, Brasil, la economía de los territorios del litoral se conectó muy tempranamente con las de otras regiones. Como explican Cerdan et al. (2012), el litoral desde el siglo XIX fue un puente entre el interior y el espacio marítimo articulado con los grandes puertos y grandes urbes del Sur de Brasil. Gracias a ello pudieron ampliarse las actividades económicas locales –a cargo en gran medida de pequeñas y medianas empresas– las que de haber estado limitadas al propio territorio, claramente no hubieran tenido el desarrollo que efectivamente demostraron.

La década de 1980 marca un antes y un después en la relación de Chiloé con mercados dinámicos. Hasta entonces se trataba de un archipiélago con una economía marcadamente campesina y con un sector turístico de baja escala; el territorio estaba débilmente articulado a mercados externos y estos eran poco dinámicos. A partir de la llegada de la industria del salmón, la cosa cambia rápida y radicalmente, y Chiloé se convierte en menos de 10 años en un actor central en el mercado mundial del salmón, con fuerte presencia de empresas transnacionales y nacionales.



Claramente en la relación de los territorios con los mercados dinámicos también operan fuerzas que juegan en contra de la mayor distribución social de los beneficios del crecimiento. En Cuatro Lagunas, Perú, las condiciones y exigencias de la ganadería han resultado en un proceso de concentración de los beneficios en la élite local. En Jiquiriça, Brasil, la estructura de la cadena de valor de los principales cultivos, como el cacao, ha significado que una parte muy importante de los beneficios sean capturados fuera del territorio, debilitándose la posibilidad de que a través de la re-inversión alimenten el crecimiento económico territorial.

En una dimensión no económica, encontramos que la mayor participación de las personas en mercados más dinámicos, fortalece su posición como ciudadanos; el caso más evidente y conocido es el de las mujeres rurales que se han incorporado a los mercados laborales no parcelarios, pero el mismo argumento se extiende al campesino que logra acceder a un mejor mercado o al pequeño empresario que accede al mercado financiero: en todos estos casos, se fortalece su capacidad de ejercicio de derechos ciudadanos. En territorios tan diversos como Tungurahua, Ecuador; Jiquiriçá y Santa Catarina, Brasil; Tarija, Bolivia; u O'Higgins, Chile, la expansión del ejercicio de ciudadanía ha ido de la mano del desarrollo de los vínculos de los territorios con mercados más dinámicos. No siempre es así, como atestiguan, en distinto grado, los casos de Yucatán en México o Santo Tomás en Nicaragua. En todo caso, es importante dejar establecido que en la relación de los territorios con los mercados las coaliciones sociales acumulan capital no solo económico, sino también social, cultural y político, y construyen discurso y, por tanto, proyecto territorial: Tungurahua y Chiloé son dos casos ilustrativos.

Estructura productiva

El grado de diversificación de la economía, la existencia de encadenamientos intersectoriales localizados en el territorio, y la variedad de tipos de empresas (por tamaño y por el peso en ellas de capital locales vs extra-territoriales), tienen una influencia marcada en las dinámicas territoriales. A igualdad de otras condiciones, territorios con economías más diversificadas, con mayor densidad de encadenamientos localizados en el territorio, con una sólida presencia de pequeñas y medianas empresas, y con un peso significativo en la economía de capitales locales, tendrán mayores opciones para construir dinámicas de crecimiento con inclusión social.

Una estructura productiva como la señalada en primer lugar ofrecerá más canales de participación en la economía a una mayor diversidad de grupos de la población. En segundo lugar, una economía de ese tipo propenderá a una mayor diversificación de activos, a la desconcentración de los vínculos con los mercados consumidores o laborales y a la diversificación del tejido social. En tercer lugar, una economía de este tipo debería ser más resiliente frente a shocks económicos o ambientales. Por otra parte, una estructura económica como la señalada no necesariamente conduce a mayores tasas de crecimiento, ni, tampoco, a una mayor sustentabilidad ambiental.



Como explican Cerdan et al. (2012) en su análisis sobre el litoral de Santa Catarina, Brasil, ahí tenemos un caso de un territorio que desde épocas muy tempranas conformó una estructura productiva bastante diversificada, con importante presencia de pequeñas y medianas empresas, y con protagonismo de capitales locales. Esta estructura tiene su origen en la forma de ocupación del territorio por los primeros colonos europeos, a través de una economía de pequeños productores. La acumulación del excedente agrícola es la base inicial con que se inicia en el siglo XX la diversificación productiva y la formación gradual de empresas manufactureras y de servicios, concentradas en pueblos que se desarrollan y crecen como ciudades del territorio. Las políticas públicas de épocas más recientes se propusieron expresamente favorecer mayores encadenamientos entre las empresas y sectores existentes, con miras a la formación de clusters. En el sector rural, las políticas públicas de desarrollo territorial empujaron en la misma dirección.

Los territorios del Chaco tarijeño, en Bolivia, analizados por Hinojosa y sus colaboradores (2012) son otro ejemplo de cómo una estructura productiva diversificada, con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas y de capitales locales, confiere ventajas marcadas a los territorios que las contienen. En Tarija se desarrolló durante largo tiempo una economía agraria bastante dinámica, a partir de cuyos excedentes fueron surgiendo sectores agroindustriales y de servicios. La fortaleza de esta estructura productiva fue suficiente como para que los territorios estudiados por Hinojosa et al. hayan podido manejar o "negociar" las nuevas condiciones de su propio desarrollo, derivado del descubrimiento y posterior explotación de enormes reservas de gas.

De todos los casos analizados por el programa, el de Chiloé Central con su industria del salmón, es uno de los que mejor ilustra el efecto de un territorio hoy en día organizado en torno a un cluster (Ramírez et al. 2012). En efecto, si bien la producción y exportación de salmón está concentrada en una decena de empresas, casi todas de capitales extranjeros, no es menos cierto que alrededor de un millar de empresas pequeñas y medianas, de capitales locales, hacen parte del sistema a través de la provisión de bienes y servicios en diferentes etapas de la cadena de valor. Ese entramado de relaciones interempresas e inter-sectoriales genera empleo a alrededor del 50% de la población económicamente activa del territorio. Esta estructura productiva está en la base de la composición, del proyecto y de los capitales de la coalición social dominante en el territorio.

El territorio CHAH, en Yucatán, estudiado por Yúnez-Naude et al. (2012), es un caso particular. Durante muchos años y hasta fines de la década de 1980, la estructura productiva del territorio estaba conformada por pequeños productores agrícolas (ejidatarios) dedicados al cultivo del henequén, y una empresa para-estatal monopólica responsable del procesamiento y la comercialización de los derivados de esta fibra vegetal. Esta realidad se desmorona con el retiro de los financiamientos públicos, y es reemplazada por una estructura mucho más diversificada, con fuerte presencia de empresas de diverso tamaño tanto en la manufactura (maquila textil) como en los servicios de distinto tipo, pero



muchos de ellos ligados al turismo. La evolución tan reciente de esta nueva estructura productiva (apenas 20 años), impide todavía saber cuáles serán sus efectos de mediano y largo plazo sobre la vida social y política del territorio y sobre las condiciones de crecimiento, inclusión social y sustentabilidad.

Ciudades en el territorio

Esencialmente todo territorio rural en América Latina mantiene relaciones con centros urbanos para poder realizar una cantidad de funciones de todo tipo. Sin embargo, no todos los territorios rurales latinoamericanos contienen en su interior una ciudad; muchas veces los vínculos urbano-rurales se dan entre un espacio rural y un centro urbano externo al territorio. Nuestro argumento es que los territorios que cuentan con una ciudad, obtienen un conjunto de ventajas que facilitan el desarrollo de dinámicas que conducen a crecimiento económico con mayor inclusión social, aunque no necesariamente con mayor sustentabilidad. Lo que importa, para ser claros, no es solo la ubicación física de la ciudad dentro de los límites definidos del territorio, sino la existencia de relaciones funcionales entre una ciudad de suficiente tamaño y su entorno rural. Al contener una ciudad, ya no se trata de territorios rurales en el sentido más estricto del término, sino de lugares que son mejor representados por el término de territorios urbano-rurales.

De los 15 territorios incluidos en libro editado por Berdegué y Modrego (2012), 6 son los casos en que los territorios contienen centros urbanos de cierto tamaño que juegan un papel principal en las dinámicas territoriales: litoral de Santa Catarina, Brasil (Cerdan et al. 2012); Jiquiriçá, Brasil (Quan et al. 2012); Chaco Tarijeño, en Bolivia (Hinojosa et al. 2012); Chiloé, Chile (Ramírez et al 2012); Santo Tomás, Nicaragua (Gómez y Ravnborg 2012); y Tungurahua, Ecuador (Ospina et al. 2012a). Los restantes casos tratados en el libro corresponden a situaciones en que los vínculos urbano-rurales se dan entre el territorio rural con ciudades externas al territorio.

La existencia de una ciudad intermedia permite la retención, consumo, ahorro e inversión de una mayor parte de los excedentes generados en el territorio dentro de sus propias fronteras. En el territorio de Jiquiriçá, por ejemplo, Quan et al. (2012) reportan que muchos de los comerciantes de cacao de la ciudad de Mutuípe, son también agricultores, lo que propicia flujos de re-inversión entre la agricultura y los servicios, todo dentro del mismo territorio; en ausencia de esta ciudad del territorio como centro comercial, serían seguramente los comerciantes de Ilheus e Itabuna, fuera del territorio, los que capturarían una parte importante del valor de la producción. En Susa y Simijaca, Colombia, la mayoría de los hacendados que controlan la mayor parte de la producción, comercialización y procesamiento de la leche, viven en Bogotá, a dos horas de distancia del territorio (Arias et al., 2012); ello afecta no solo la proporción del valor agregado que se consume, ahorra o reinvierte localmente, sino con toda seguridad las relaciones sociales de esta élite con el resto de los actores y agentes públicos y privados del territorio.



En el Secano de O'Higgins al igual que en Cariri, la inexistencia de una ciudad en el territorio implica que los excedentes del crecimiento económico se transfieren afuera del territorio, como señalan Modrego et al. (2012) y Favareto et al. (2012), respectivamente. Como concluyen Favareto et al. (2012), estos territorios son exportadores de bienes primarios, los que se procesan y/o comercializan por actores económicos de fuera del territorio, quienes capturan la mayor parte de valor agregado, en desmedro del desarrollo de los pueblos y ciudades pequeñas del propio territorio.

En contraste, como explican Cerdan et al. (2012), la existencia de varias ciudades de hasta 100 mil habitantes en el litoral de Santa Catarina, permitió el desarrollo temprano de un mercado para la producción agrícola y facilitó el acceso de la población local a servicios públicos y privados. Según Cerdan et al. es en estas ciudades del litoral donde se pueden desarrollar las nuevas actividades industriales y de servicios, basadas en parte en el capital acumulado por pequeños productores agrícolas, lo que a su vez fue posible gracias a una estructura agraria desconcentrada desde las primeras épocas de la colonización del territorio. En este territorio del Sur del Brasil, la estructura agraria, la estructura productiva, los vínculos con mercados de la región circundante, y la inversión pública, se encadenaron desde épocas muy tempranas en círculos virtuosos que determinaron una dinámica de desarrollo endógeno que ofreció mayores oportunidades a la mayoría de la población que lo observado en otras partes del país; las ciudades del territorio fueron a la vez causa y consecuencia de estos procesos que no hubieran sido posibles en su ausencia.

Las ciudades pequeñas y medianas al interior del territorio, muchas veces operan como puentes importantísimos para que los pequeños productores puedan acceder a mercados más dinámicos. Citando nuevamente el caso de Jiquiriçá analizado por Quan et al. (2012), apuntamos al ejemplo de ciudades como Amargosa y Jaguaquara donde los pequeños y medianos productores de plátano y yuca y de frutas y verduras, respectivamente, pueden colocar sus productos, en tanto que los grandes productores son los que pueden llegar directamente a ciudades mayores fuera del territorio.

La existencia de una ciudad en el territorio casi por definición implica la existencia de nuevos tipos de actores sociales, lo que da la base para la posibilidad de que surjan nuevos tipos de coaliciones que serían impensables en un territorio puramente rural. Por ejemplo, como reportan Hinojosa et al. (2012) para el caso del Chaco Tarijeño (Bolivia), ciudades como Villamontes, Tarija o Entre Ríos han jugado un papel central en la conformación de las alianzas y coaliciones, que a su vez expresan diferentes proyectos territoriales. Son alianzas no solo entre agricultores, como sería el caso en un territorio carente de ciudad, sino que incluyen agroindustriales, sectores de la construcción o de las finanzas, dueños de medios de comunicación, y personas dedicadas a las profesiones liberales. En contraste, Escobal et al. (2012b), en su análisis sobre Jauja, Perú, explican que el poder político y económico del valle del Mantaro está localizado en la ciudad de



Huancayo, en desmedro del territorio de Jauja; la inexistencia de una ciudad de mayor envergadura en el territorio, impidió que ahí se generaran actividades complementarias a la producción agrícola, como el transporte o el procesamiento, por lo que finalmente fue el territorio de Huancayo el que terminó capitalizando las ventajas económicas del boom de la papa.

La existencia de una ciudad de suficiente tamaño en el territorio, incrementa el poder político de este y su capacidad de negociación con agentes públicos y privados externos al territorio. Estas élites son ciertamente urbanas, pero para muchos de ellos la base de su poder es agraria, es decir, expresan la realidad y las posibilidades de territorios urbano-rurales. Esta es la situación que observamos en Tarija, Bolivia, donde las coaliciones dirigentes del desarrollo enfrentan la "guerra del gas" con un proyecto territorial propio, expresado en la consigna "el gas se siembra".

Cabe señalar que la intensidad de los vínculos de un territorio rural con una ciudad importante externa al territorio, también pueden tener efectos positivos sobre la dinámica rural. Hernández y Trivelli (2012) en su estudio del Valle Sur-Ocongate, muestran cómo la proximidad con la ciudad de Cusco ha sido un factor dinamizador de la economía, de la política y de la cultura del territorio rural. Cusco es un importante mercado de productos agrícolas que por su tamaño dinamiza a la agricultura campesina del Valle Sur-Ocongate, y es también una fuente de turistas que han estimulado el nacimiento en el territorio de una economía basada en activos culturales. La diferencia con la situación en la que la ciudad está contenida en el territorio, es quién y dónde se captura la mayor parte del valor agregado de estas actividades.

Inversión pública

La inversión pública tiene el potencial de ser una fuerza transformadora de los territorios rurales. Los casos del Secano de O'Higgins en Chile (Modrego et al. 2012) y de Santo Tomás en Nicaragua (Gómez y Ravnborg 2012), son particularmente ilustrativos de situaciones en que inversiones públicas tanto en bienes públicos como privados, catalizan procesos de transformación productiva que cambian las dinámicas territoriales. En O'Higgins, un territorio que se caracterizaba por su pobreza, su estancamiento productivo y su deterioro ambiental, recibió inversiones públicas en caminos rurales y en servicios públicos, las que aunadas a un conjunto de cambios institucionales que liberalizaron el acceso y el uso de las aguas subterráneas, gatillaron un fuerte flujo de inversión privada que provocó la rápida agroindustrialización del territorio (Modrego et al. 2012), con una importante reducción de la pobreza, particularmente por la fuerte incorporación de las mujeres rurales al mercado laboral. En Santo Tomás, las inversiones nacionales y de la cooperación internacional en caminos, instalaciones para el acopio refrigerado de leche, y formación y fortalecimiento de cooperativas, han sido elementos centrales de la transformación económica de este territorio, pero han también catalizado los procesos de reconcentración de la tierra y de expulsión de los campesinos pobres. En ambos territorios hay procesos importantes en curso de deterioro ambiental.



La observación significativa es que no existe una relación siempre directa y positiva entre estas inversiones y cambios que conduzcan a crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Los efectos de este tipo de inversiones públicas están mediados por los marcos institucionales (formales e informales) que operan en el territorio y por el papel que jueguen diferentes coaliciones en atraer, regular y/o controlar el tipo, localización, y flujo de dichas inversiones.

En su análisis sobre la ribera Norte del Humedal de Cerrón Grande, en El Salvador, Gómez y Cartagena (2012) analizan en detalle la influencia decisiva de las grandes inversiones en infraestructura sobre las dinámicas de ese territorio. Puede decirse que al menos desde mediados de la década de 1970, la construcción social del territorio ha sido el resultado del juego entre las decisiones externas de inversión pública, y los intentos de los actores internos a veces por resistir y a veces por influir en estos flujos de recursos. La identidad misma del territorio como una región proveedora de servicios ambientales al resto del país, es consecuencia de este juego. Lo que es claro es que dicha inversión si bien ha alterado tanto el paisaje como las estructuras productivas territoriales, ha sido incapaz o insuficiente para catalizar un círculo virtuoso localizado de crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental; a juicio de Gómez y Cartagena, esto tiene que ver con la falta de fuerza de las coaliciones sociales del territorio para hacer prevalecer su proyecto de desarrollo por encima del que está encarnado en las decisiones exógenas sobre grandes obras de infraestructura.

Favareto et al. (2012) analizan el caso de Cariri, en Paraíba, Brasil, y miran a otro tipo de inversión pública, esta vez de carácter social. Como ya hemos dicho, Cariri es un territorio con una historia marcada por la estructura agraria propia de la gran hacienda nordestina, con muy débiles vínculos con mercados dinámicos, y con una estructura social que hasta no hace mucho estuvo controlada férreamente por una pequeña élite de latifundistas. Este andamiaje se derrumba a fines del siglo XX en buena medida gracias al retiro de los antiguos subsidios que sostenían el cultivo de algodón y la ganadería extensiva, y su reemplazo por un nuevo tipo de gasto público orientado a las mayorías pobres de la población, tanto a partir de programas de derechos universales (por ejemplo, pensiones) como de otros focalizados (por ejemplo, los programas de transferencias monetarias condicionadas y los de apoyo a la agricultura familiar). Sin embargo, las mayorías sociales hasta hoy no logran convertir estas nuevas inversiones en palancas para un desarrollo crecientemente autosostenido, y lo que sí observamos es una nueva dependencia, esta vez de las nuevas estructuras sociales y políticas que operan los programas públicos y cuya acción es decisiva para la integración del ingreso familiar de un alto porcentaje de la población local.

No muy distante de Cariri (para la escala de Brasil) se encuentra Jiquiriça, ambos territorios en la gran región del Noreste. Los mismos programas y formas de inversión pública que en Cariri han tendido a estimular una condición de dependencia de un alto porcenta-



je de la población de las transferencias sociales, en Jiquiriçá han tenido el efecto de dinamizar la economía local y fortalecer el papel en ella de los agricultores familiares. Quan y sus colaboradores (2012), muestran que estos efectos positivos tienen una explicación, al menos parcial, en la historia larga de la estructura agraria, la estructura productiva, la relación con los mercados y el papel de las ciudades del territorio. Gracias a estas condiciones estructurales más favorables, los pequeños empresarios de Jiquiriçá, tanto agricultores como comerciantes, a lo largo del tiempo desarrollaron habilidades sociales y acumularon distintos tipos de capitales, lo que les permitió responder a la oportunidad política creada por los nuevos programas públicos de los gobiernos federal y estatal.

La situación en el territorio estudiado en Yucatán por Yúnez-Naude et al. (2012), tiene algunas semejanzas con el caso de Cariri. Durante décadas el estado mexicano invirtió millones de dólares en promover y sustentar la industria del henequén. A fines de la década de 1980 e inicios de la de 1990, da término a ese apoyo lo que provoca el colapso final de la industria. Pero ello no implica un cese de la inversión pública ni de su papel central en los equilibrios económicos, sociales, y políticos del territorio, sino solamente un cambio de contenidos. A partir de 1990, se ponen en marcha enormes programas de transferencias sociales y de redes de protección social a las personas y hogares, incluyendo pero no limitándose a los pobres. Además, se establece un fuerte sistema de subsidios al campo, teóricamente compensatorio de los efectos negativos del acuerdo de libre comercio suscritos por México con USA y Canadá. Surgen decenas de programas de apoyo a la micro y pequeña empresa. La inversión en carreteras es de tal magnitud que los kilómetros de caminos asfaltados se expanden ocho veces en 15 años. Y, por si fuera poco, el gobierno central pone en marcha un serie de subsidios directos e indirectos a la industria maquilera textil, que hoy en día es el mayor empleador del territorio.

Los territorios de Tarija, Bolivia, analizados por Hinojosa et al. (2012), también contrastan con Cariri. Aquí la inversión pública más relevante en el período estudiado es aquella proveniente o financiada por las rentas del gas. El destino de estos recursos ha sido el desarrollo de infraestructura vial e hídrica, habilitación urbana, electrificación rural, educación y salud. El destino de estas inversiones ha sido influido por el juego de las coaliciones sociales pre-existentes en estos territorios, las que se habían constituido desde mucho antes de la existencia de las rentas gasíferas, sobre la base como ya hemos dicho de una estructura productiva diversificada, si bien de base agraria. Es esta capacidad de los actores sociales del territorio de participar de la negociación del destino y uso de la renta gasífera -la llamada "guerra del gas", lo que denota que esta negociación no fue una taza de leche- lo que hace la diferencia con casos como el de Cariri, donde los actores locales son entes mucho más pasivos o menos influyentes en la determinación del sentido, destino y uso de la inversión pública.

El trabajo de Hernández y Trivelli (2012) sobre el territorio de Valle Sur-Ocongate, en Perú, también arroja luces sobre este tema. Aquí la inversión pública es financiada por



una fracción del canon minero⁴ que es destinada directamente a los gobiernos distritales que conforman el territorio. La observación importante de este caso es que la disponibilidad de estos recursos, coincidió con un proceso de cambio en el perfil de las autoridades locales, a favor de alcaldes de origen rural e indígena, con experiencia escolar o laboral en la ciudad, dotados de un discurso que combina la lógica desarrollista de las ONGs en que muchos de ellos han trabajado, con una marcada reivindicación de sus raíces étnicas. El resultado, señalan Hernández y Trivelli, es un "indigenismo modernizante". Además, dada la fragmentación del sistema político peruano, estas autoridades locales no tienen ninguna necesidad de ser parte de plataformas o partidos políticos de alcance nacional o regional, por lo que la agenda local domina sin contrapeso. Esta combinación de factores se ha traducido en inversiones principalmente en obras de infraestructura, riego, educación y conectividad a Internet. Al mismo tiempo, la misma combinación de factores desincentiva la coordinación inter-municipal y fragmenta las inversiones a la mínima escala posible, que es la distrital.

La dimensión ambiental de las dinámicas

En forma preliminar es posible anticipar algunas reflexiones sobre la forma de incorporar la dimensión ambiental en el modelo aquí planteado. Parece claro que no hay una relación unívoca entre dinámicas de crecimiento con inclusión social y dinámicas ambientalmente sustentables. En los distintos estudios tenemos diferentes efectos en términos de crecimiento y de inclusión social, todos ellos con tendencias de degradación de los recursos naturales. Al parecer los factores que determinan que una dinámica sea más o menos incluyente social y económicamente son independientes de aquellos que son responsables del grado de sustentabilidad ambiental.

El caso de Santa Catarina, en Brasil, analizado por Cerdan et al. (2012), es especialmente ilustrativo. Ya hemos señalado que en este territorio los factores determinantes de las dinámicas territoriales tendieron a jugar a favor de procesos de crecimiento con grados importantes de inclusión social (aunque sectores importantes de la población local no se han visto favorecidos). Además, en Santa Catarina muchas de las dinámicas específicas se basan en la conservación y valorización del capital natural, como es el caso del turismo. En esta parte de Brasil se han establecido organizaciones públicas, con importantes niveles de participación social y con recursos no despreciables, encargadas de promover objetivos ambientales. A pesar de todo ello, Cerdan et al. reportan importantes impactos ambientales, incluyendo la degradación de los suelos y de los recursos hídricos y la con-

⁴ El Canon Minero en Perú, es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la explotación de los recursos mineros.



taminación del litoral por insuficiencias del saneamiento en la mayoría de los municipios costeros.

Nuevamente, la existencia o no de coaliciones sociales y la naturaleza de su proyecto, parecen ser una pieza central de la explicación. Modrego et al. (2012) explican cómo en el Secano de O'Higgins, en Chile, el problema del uso excesivo del agua subterránea ha conducido a situaciones de escasez ya no solo para el riego, lo que limita la continuación del proceso de transformación productiva, sino incluso para el consumo humano. Se llegó a esta situación porque ninguno de los actores o sus coaliciones, tuvieron interés en promover las reformas institucionales que hubieran conducido a un uso sustentable del recurso. En un contexto de liberalización y privatización del recurso, tanto los grandes como los pequeños propietarios antepusieron su interés inmediato de asegurarse el mayor acceso posible al recurso; el Estado incumplió su responsabilidad de determinar la cantidad de agua explotable en el acuífero, y de contener los derechos de aprovechamiento en un nivel sustentable.

El tema ambiental también puede intervenir en los procesos a través de shocks. Es el caso evidente de Chiloé Central, donde la dinámica económica empujó al ecosistema más allá de un punto crítico. Esta historia está en plena evolución y no sabemos en qué grado y en qué dirección este shock afectará a la dinámica de Chiloé Central. Una opción es un cambio de dinámica y otra opción es una reforma de la dinámica actual para introducir mayores grados de precaución ambiental. Pero, al menos en principio, no cabe duda de que un shock ambiental puede provocar un cambio fuerte en la dinámica de un territorio.

Finalmente, la naturaleza importa para las dinámicas de desarrollo en la medida en que ciertas actividades u oportunidades son inextricablemente tributarias del capital natural, sobretodo en el caso de dinámicas rurales. Es este el caso de la localización central privilegiada de Tungurahua, de la existencia de bahías protegidas en Chiloé o de pastos naturales en Santo Tomas, o del sistema de lagunas en Cuatro Lagunas. Además, la historia larga de ocupación territorial basada en este capital natural explica buena parte de los atributos actuales de los actores sociales.



5.- Implicaciones

Finalmente, queremos plantear algunas implicaciones del modelo propuesto.

La primera implicación es una revisión importante de la hipótesis inicial del programa. No es que dejemos de postular que el juego de actores, instituciones y activos es una determinante principal de las dinámicas territoriales. De hecho, cada uno de los cinco elementos aquí discutidos, contienen actores, instituciones y activos. La estructura agraria, por ejemplo, hace referencia a activos (tierra y otros recursos naturales), a actores sociales (latifundios, empresas capitalistas modernas, etc.), e instituciones (leyes, reglamentos, o reglas informales que regulan la propiedad y el acceso a los activos, y las relaciones de poder que de ahí emanan). Las coaliciones sociales son arreglos de actores, pero involucran activos (los capitales de que está dotado cada actor y la coalición en su conjunto) e instituciones (el discurso de la coalición que refleja normas, creencias y otros elementos que estructuran las decisiones de los actores). Pero el nuevo modelo nos permite pasar de una formulación genérica a otra bastante más específica, que tiene dos ventajas sobre la formulación inicial: el modelo pasa a ser una hipótesis falseable, es decir, que se puede poner a prueba a través del análisis de nuevos casos, para establecer cuáles son los límites de su poder explicativo.

Esto nos lleva a la segunda implicación. La ventaja de una "teoría de alcance medio" es que permite identificar instrumentos de política. La primera implicación normativa, es que la historia pesa y en la mayoría de los territorios rurales de América Latina, pesa en contra de dinámicas de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Esto es consecuencia del efecto de los factores estructurales que hemos discutido en las páginas anteriores. Por ejemplo, como en la mayor parte de los territorios de América Latina la concentración de la tierra es una marca determinante, va ser difícil, siempre, romper con las estructuras sociales que se construyeron sobre estos fundamentos de la larga historia local.

La segunda implicación normativa es que las políticas de desarrollo rural harían bien en prestar mucha más atención a las instituciones y los arreglos institucionales (es decir, las reglas y normas, formales e informales que estructuran las decisiones de los actores, y las relaciones de poder que están inmersas en cada una de ellas) y no concretarse exclusiva o privilegiadamente en las transferencias de activos. En territorios donde las instituciones surgen de estructuras con raíces tan profundas, puede ser más importante buscar alterar las reglas del juego que concentrar todas las energías en las capacidades de los jugadores. Un desarrollo rural centrado en el cambio institucional debe ser algo bastante diferente al actual desarrollo rural centrado en las dotaciones de activos.

Otra implicación normativa es que las transformaciones de los territorios en el sentido que ha explorado el programa (crecimiento económico con inclusión social y sustentabili-



dad ambiental), parecen ser resultado de coaliciones de actores diversos, más que de organizaciones de los pobres. Por supuesto, si los pobres no hacen parte de las coaliciones sociales, es más que probable que las dinámicas resultantes no expresarán sus intereses. Pero la mayor parte de las políticas de desarrollo rural han tendido a centrarse o bien en promover la organización de los pobres consigo mismos o bien en promover relaciones contractuales o cuasi-contractuales de los pobres con otros actores en el marco de cadenas de valor. Ninguna de estas dos soluciones da origen a coaliciones sociales transformadoras de la realidad, particularmente cuando, como hemos visto, ese status quo favorece resultados en que no hay crecimiento económico y/o inclusión social y/o sostenibilidad ambiental. En otras palabras, hay que cambiar nuestra idea de quienes son los agentes de las transformaciones rurales.

La última implicancia que queremos resaltar se deriva de nuestra constatación de que lo que importa no es una especie de suma lineal, aditiva de los factores aquí discutidos. Lo que hace la diferencia es la forma en que dichos factores interactúan. Si eso es correcto, no tenemos más remedio que aceptar que no hay un solo sendero para los diseños de política, sino que estos tendrán que ser específicos al menos para tipos de dinámicas. Esto nos remite al difícil asunto de las capacidades institucionales, públicas y privadas, para acometer esta tarea y, por tanto, a la necesidad de concluir que el camino al desarrollo territorial pasa por el desarrollo institucional y la construcción de gobernanza.



Bibliografía

Abramovay R. 1999. O Capital Social dos Territorios: repensando o desenvolvimento rural. Economics Department, University of Sao Paulo.

Acemoglu, D. y Robinson, J.A. 2006. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. New York: Cambridge University Press.

Acemoglu, D., Johnson, S. y Robinson, JA. 2001. Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review 91: 1369–401.

Acuña, D. y Mendoza, M. (2010): Dimensión Ambiental de la Dinámica de Desarrollo del Secano Interior de la Región de O'Higgins.

Alesina, A. y Rodrik, D. 1994. Distributive Politics and Economic Growth. Quarterly Journal of Economics 109: 465–89.

Arias, M., Bocarejo, D., Ibáñez, A., Jaramillo, C., Fernández, M., Kisner, J. 2012. Cuando el crecimiento viene de afuera: dinámicas territoriales en Susa y Simijaca. En: Berdegue, J. y Modrego, F. De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Aroca, P., D. Guo, and G. J. Hewings. 2006. Spatial convergence in China:1952-99. Working Papers RP2006/89, World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER)

Arrow, K., Bolin, B., Costanza, R., Dasgupta, P., Folke, C., Holling, C.S., Jansson, B.O., Levin, S., Mäler, K.G., Perrings, C., y Pimentel, D. 1995. Economic growth, carrying capacity and the environment. Science 268: 520-521.

Banco Mundial. 2005. Equity and Development: World Development Report 2006. World Bank. Washington DC.

Banco Mundial. 2007. Agriculture for Development: World Development Report 2008. World Bank, Washington DC.

Banco Mundial. 2009. Reshaping Economic Geography: World Development Report 2009. World Bank, Washington DC.

Bardhan, P.K. 1984. Land, Labor, and Rural Poverty: Essays in Development Economics. Columbia University Press, New York.



Bates, R. H., Greif, A., Levi, M., Rosenthal, J-L, and Weingast, B. R. 1998. *Analytic Narratives*. Princeton and Oxford. Princeton University Press.

Bebbington, A. J., Dani, A. A., de Haan, A. y Walton, M. 2008. *Inequality and development: Dysfunctions, traps and transitions*. En: A. J. Bebbington et al. (eds): *Institutional Pathways to Equity. Addressing Inequality Traps*. The World Bank, Washington DC.

Bentancor, Andrea Modrego Félix y Berdegué Julio A. 2008. *Sensibilidad de la pobreza al crecimiento y a los cambios distributivos en las comunas rurales de Chile*. Documento de Trabajo N° 8 Programa Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Berdegué, J. y Modrego, F. (Editores). 2012 *De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina*, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2005. *Estrategia de Desarrollo Rural*. Washington DC: BID.

Birdsall, N. y Londoño, J. L. 1997. *Asset Inequality Matters: An Assessment of the World Bank's Approach to Poverty Reduction*. *American Economic Review* 82 (2): 32–37.

Birner, R. y Wittmer, H. 2003. *Using Social Capital to Create Political Capital: How Do Local Communities Gain Political Influence? A Theoretical Approach and Empirical Evidence from Thailand*, en N. Dolsak y E. Ostrom (eds), *The Commons and the New Millennium, Challenges and Adaptations*, Cambridge, MA: MIT Press, pp 291-334.

Birner, R., Gupta, S., Sharma, N., and Palaniswamy, N. 2007. *The Political Economy of Agricultural Policy Reform in India. The Case of Fertilizer Supply and Electricity Supply for Groundwater Irrigation*. IFPRI, New Delhi.

Blum B. S. 2003. *The Curse of Geography: A View About The Process of Wealth Creation and Distribution*. *Cuadernos de Economía*, 40 (121): 423-433.

Bourdieu, P. 1986. *The Forms of Capital* en J.E. Richardson (ed.), *Handbook for Theory of Research for the Sociology of Education*, Santa Barbara, CA: Greenwood Press, pp 46-58.

Bourdieu, P. 1977. *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Bourguignon, F. 2004. *The poverty-growth-inequality triangle*. Paper prepared for a Conference on Poverty, Inequality and Growth. Paris, November 13, 2003.

Bourguignon, F., Ferreira, F., and Walton, M. 2007. *Equity, efficiency and inequality traps: a research agenda*. *Journal of Economic Inequality* 5(2): 235-56.



Bourguignon, François, Francisco H. G. Ferreira, and Nora Lustig. 1998. *The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America*. Washington, D.C.: World Bank.

Bourguignon, François, Francisco H.G. Ferreira, and Phillippe Leite. 2002. *Beyond Oaxaca-Blinder: Accounting for Differences in Household Income Distributions across Countries*. Policy Research Paper 2828. Washington, D.C.: World Bank.

Boyce. J. K. 2003. *Inequality and environmental protection*. Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst Working Paper Series 52. UMASS.

Brock, William and Taylor, M. 2010. "The Green Solow model," *Journal of Economic Growth*, Springer, vol. 15(2): 127-153.

Carter, M. R. and F. J. Zimmerman. 2000. *The dynamic cost and persistenc of assett inequality in an agrarian economy*. *Journal of Development Economics* 63(2): 265-302.

Celis, Ximena, Félix Modrego y Julio A. Berdegué. 2008. *Geografía de la desigualdad mapuche en las zonas rurales de Chile*. Documento de Trabajo N°7. Programa Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina). 2010. *La Hora de la Igualdad. Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir*. Santiago: CEPAL.

Cerdan, C., Aquilante Policarpo, M., Freire Vieira, P. 2012. *Sinergias y conflictos entre dinámicas territoriales: rumbo al desarrollo sustentable en la zona costera del Estado de Santa Catarina, Brasil*. En: Berdegué, J. A. y Modrego, F. (Editores). *De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina*, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

da Veiga J. E. 2000. *Desenvolvimento Territorial do Brasil: Do Entulho Varguista ao Zonamento Ecológico-Econômico*. Universidad de Sao Paulo. Departamento de Economía. São Paulo, Brasil.

Damianović, N., Valenzuela, R., y Vera, S. 2009. *Dinámicas de la desigualdad en El Salvador: hogares y pobreza en cifras en el período 1992 - 2007*. Documento de Trabajo N° 52. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

De Ferranti D., G. E.Perry, William Foster, Daniel Lederman, y Alberto Valdés, 2005. *Beyond The City. The Rural Contribution to Development*. World Bank Latin American And Caribbean Studies, The World Bank, Washington, D.C.



de Ferranti, D., Perry, G. E., Ferreira, F.H.G., Walton, M. 2004. Inequality in Latin America. Breaking with history? The World Bank. Washington DC.

De Janvry A. and E. Sadoulet. 2004. Toward a territorial approach to rural development. Paper prepared for the Fourth Regional Thematic Forum in Latin America and the Caribbean, on Harvesting Opportunities: Rural Development in the 21st century, Costa Rica, 19-21 October 2004.

Deininger, K. y Squire, L. 1996. A New Dataset: Measuring Income Inequality. World Bank Economic Review 10 (3): 565-91.

Deininger, Klaus and Pedro Olinto. 2000. Asset Distribution, Inequality, and Growth. World Bank Policy Research Paper 2375. Washington, D.C.

Díaz, O., Escobar, E., Gómez, I., Morán, W. (2010). "La dinámica agroambiental de la zona norte del Humedal Cerrón Grande". Documento de Trabajo N° 66. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

Echeverri, R. y Ribero, M. 2002. Nueva Ruralidad. Visión del Territorio en América Latina y el Caribe (Manuscrito).

Echeverri, Rafael y Sotomayor, Octavio. 2010. Estrategias de gestión territorial en las políticas públicas de Iberoamérica. Santiago: Grupo Inter-Agencial de Desarrollo Rural.

Echeverría R., 2003. Desarrollo territorial rural. Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

Elbers, C., Lanjouw, J. O., Lanjouw, P. 2003. Micro-level Estimation of Poverty and Inequality. Econometrica 71(1): 355-364.

Ellison, G., and E. L. Glaeser. 1997. Geographic concentration in U.S. manufacturing industries: A dartboard approach. Journal of Political Economy 105: 889-927.

Escobal, J y Ponce C. 2008. Dinámicas provinciales de pobreza en el Perú 1993 - 2005. Documento de Trabajo N° 11. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

Escobal, J., Ponce, C., Hernández, R. 2012a. El territorio de Cuatro Lagunas en Perú. Intervenciones de actores extra-territoriales y cambios en la intensidad de uso de los recursos naturales. En: Berdegue, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Escobal, J., Ponce, C., Hernández, R. 2012b. Límites de la articulación a mercados dinámicos en la sierra de Jauja en Junín. En: Berdegue, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yu-



catán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Escobal, Javier y Ponce, Carmen. Spatial patterns of growth and poverty changes in Peru (1993-2005). 2011. Documento de Trabajo N° 78. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

Escobar, Germán y Swinton, Scott. 2003. Relaciones entre pobreza rural y el deterioro ambiental en algunos países de América Latina. En: Escobar, G. (Editor). Pobreza y Deterioro Ambiental en América Latina. Santiago: FONTAGRO y Rimisp.

Ezcurra, R., Pascual, P. and Rapun, M. The Spatial Distribution of Income Inequality in the European Union. Environment and Planning A 2007, Volume 39, Pages 869-890.

Fajnzylber, F. 1989. Industrialización en América Latina: De la "caja negra " al 'casillero vacío'. Cuadernos de la CEPAL, N° 60. Santiago: CEPAL.

Favareto, A. y Abramovay, R. 2009. O surpreendente desempenho do Brasil rural nos anos 1990. Documento de Trabajo N° 32. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

Favareto, A., Abramovay, R., D'Olivera, M., Diniz, J. 2012. Desarrollo territorial en una región del Noreste Semiárido brasileño – Más allá de las transferencias de ingresos. En: Berdegue, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Fernández, M., Hernández, C., Ibáñez, A. M, y Jaramillo, Ch. 2009. Dinámicas departamentales de pobreza en Colombia 1993-2005. Documento de Trabajo N°33. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

Fligstein, N. 2001. The Architecture of Markets. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Flores, M., Lovo, H., Reyes, W. y Campos, M. 2009. Cambios en la pobreza y concentración del ingreso en los municipios de Honduras: desde 1988 a 2001. Documento de Trabajo N° 50. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

Florian, M. & Emanuelsson, C. 2010. Género en las Dinámicas Territoriales en la Cuenca Ostúa-Güija, Suroriente de Guatemala.



Florián, M. 2010. Género y Dinámicas Territoriales Rurales en la Ribera Norte del Humedal Cerrón Grande (El Salvador).

Gómez, I., Cartagena, R. 2012. Dinámicas socioambientales y productivas en la zona norte de El Salvador: La ribera norte del Humedal Cerrón Grande. En: Berdegue, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Gómez, L, Martínez, B., Modrego, F. y Ravnborg, H. M. 2008. Mapeo de cambios en municipios de Nicaragua: consumo de los hogares, pobreza y equidad 1998 - 2005. Documento de Trabajo N° 12 . Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

Gómez, L. I., Ravnborg, H. M., Bayres, K., Broegaard, R. y Paiz, F. 2010. Inversión lechera – una gota que no se expande. Dinámicas territoriales en la zona lechera de Santo Tomás, Chontales, Nicaragua. Borrador de informe al Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Gómez, L., Ravnborg, H. M. 2012. La inversión lechera en Santo Tomás, Nicaragua: una gota que no se expande. En: Berdegue, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Gómez, L., Ravnborg, H., y Castillo, E. 2011. "Gobernanza en el uso y acceso a los recursos naturales en la dinámica territorial del Macizo de Peñas Blancas – Nicaragua". Documento de Trabajo N° 82. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

Grossman, Gene M. y Krueger, Alan B. 1994. Economic growth and the environment. NBER Working Paper Series w4634.

Hernández, R. y Trivelli, C. 2012. Crecimiento económico, cohesión social y trayectorias divergentes. Valle Sur – Ocongate en Cuzco, Perú. En: Berdegue, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Hinojosa, L. Hennermann, K. 2011. "Dinámicas territoriales rurales y servicios ecosistémicos en contextos de expansión de industrias extractivas". Documento de Trabajo N° 64. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

Hinojosa, L., Chumacero, J. P. y Chumacero, M. 2009. Dinámicas provinciales de bienestar en Bolivia. Documento de Trabajo N° 49. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.



Hinojosa, L., Chumacero, J., Cortez, G., Bebbington, A. 2012. Dinámicas territoriales y formación de territorios enmarcadas por la expansión de la industria del gas en Tarija, Bolivia. En: Berdegue, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Hollenstein, P., Ospina, P., Poma, J., Portillo, B., & Rodriguez, L. 2010. Las relaciones de género y los sistemas de producción y comercialización: Análisis del caso del café y del maíz duro.

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y MDA (Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil). 2006. Desenvolvimento Sustentável e Territorialidade: identidades e tipologias. Bases conceituais e proposta metodológica, Brasília, BR.

Kempf, H. y Rossignol, S. 2005. Is inequality harmful for the environment in a growing economy? Nota di Lavoro 5.2005. Milan: Fondazione Eni Enrico Mattei.

Krugman, P. 1995. Development, Geography, and Economic Theory. The MIT Press. Cambridge, MA.

Larrea, C., Landín, R., Larrea, A. I., Wrborich, W. y Fraga, R. 2008 mapas de pobreza, consumo por habitante y desigualdad social en el Ecuador: 1995 – 2006. Metodología y resultados. Documento de Trabajo N° 13. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

Lustig, Nora, López-Calva, Luis F., y Ortiz-Juarez, Eduardo. 2011. The Decline in Inequality in Latin America: How Much, Since When and Why. Tulane Economics Working Paper Series, Working Paper 1118. Tulane University.

Macé, J. C. y Bornschlegl, T. 2010. "Dinámicas de Sistemas de Género en Chiloé Central, o la Cuadratura de los Ciclos". Documento de Trabajo N° 63. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

Magnani, E. 2000. The environmental Kuznets Curve, environmental protection policy and income distribution. Ecological Economics 32: 431-443.

Mahoney, James y Kathleen Thelen. 2010. A theory of gradual institutional change. En: J. Mahoney y K. Thelen (editores), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power. New York: Cambridge University Press. pp. 1-37.

MCPEC (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, Ecuador). 2010. Agenda para la Transformación Productiva. Quito: MCPEC.



- Merton, Robert K. 1949. *Social theory and social structure*. New York: Free Press, 1949.
- México (Estados Unidos Mexicanos). 2011. Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Consultada el 25 de febrero 2011 en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldrs.htm>
- Millennium Ecosystem Assessment. 2005. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press, Washington, DC.
- Modrego, F., Ramírez, E., Yáñez, R., Acuña, D., Ramírez, M., Jara, E. 2012. Fronteras de la transformación agroindustrial en el secano interior de la región de O'Higgins. En: Berdegué, J. A. y Modrego, F. (Editores). *De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina*, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).
- Modrego Félix, Celis Ximena y Berdegué Julio A. 2008a. Polarización étnica de los ingresos rurales en el Sur de Chile. Documento de Trabajo N° 15 Programa Dinámicas Territoriales Rurales Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
- Modrego, F., Ramírez, E. y Tartakowsky, A. 2008b. La heterogeneidad espacial del desarrollo económico en Chile: Radiografía a los cambios en bienestar durante la década de los 90 por estimaciones en áreas pequeñas. Documento de Trabajo N°9. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.
- North, D. C. 2005. *Understanding the Process of Economic Change*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Observatorio Europeo LEADER. 1999. *La competitividad territorial. Construir una estrategia de desarrollo territorial con base en la experiencia de LEADER*. Observatorio Europeo Leader.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2005. *Building competitive regions. Strategies and governance*. Paris: OECD.
- Olfert, M. Rose, Berdegué, Julio A., Escobal, Javier, Jara, Benjamin y Modrego, Félix. 2011. *Places for Place-Based Policies*. Manuscrito.
- Ospina, P. (coordinador), Chiriboga, M., Larrea, C., Torres, AL., Alvarado, M., Santillana, A., Larrea, AI., Maldonado, P., y Camacho, G. 2009. "Tungurahua: una vía alternativa de modernización económica". Documento de Trabajo N° 35. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile
- Ospina, P. (coordinador), Alvarado, M., Brborich, W., Camacho, G., Carrión, D., Chiriboga, M., Fraga, R., Hollenstein, P., Landín, R., Larrea, A., Larrea, C., Maldonado, P., Matuk, S., Santillana, A., Torres, A. 2012a. *Tungurahua rural: el territorio de senderos que*



se bifurcan. En: Berdegué, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Ospina, P. 2011. El Territorio de Senderos que se Bifurcan. Tungurahua: Economía, Sociedad y Desarrollo. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar - Corporación Editora Nacional.

Ospina, P. (coordinador), Andrade, D., Castro, S., Chiriboga, M., Hollenstein, P., Larrea, C., Larrea, A., Poma, J., Portillo, B., Rodríguez, L. 2012b. Café y maíz en Loja, Ecuador. ¿Un crecimiento sustentable o pasajero? En: Berdegué, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 2010. Actuar sobre el Futuro: Romper la Transmisión Intergeneracional de la Desigualdad. San José, C.R.: PNUD.

Pool-Illsley, E. & Illsley, C. 2010. La Dinámica Territorial de la Zona Mezcalera de Tlacolula- Ocotlán en Valles Centrales de Oaxaca: entre la Cultura y el Comercio.

Quan, J., Ruiz, A., Rocha, V. 2012. Diversidad territorial y crecimiento inclusivo en El Valle de Jiquiriçá, noreste de Brasil. En: Berdegué, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Quiel, P. y Pineda, G. 2010. Dinámicas territoriales en Olancho entre los recursos naturales y la agricultura

Ramírez, E., Modrego, F., Macé, J. C. y Yáñez, R. 2009a. Dinámicas Territoriales en Chiloé Central: La Fuerza de las Coaliciones Extra Territoriales. Documento de Trabajo N° 54. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

Ramírez, E. Modrego, F. Macé, J. C. y Yáñez, R. 2009b. Caracterización de los actores de Chiloé Central. Documento de Trabajo N° 55. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile.

Ramírez, E., Modrego, F., Yáñez, R., Mace, J. 2012. Dinámicas territoriales en Chiloé, Chile: del crecimiento económico al desarrollo sostenible. En: Berdegué, J. A. y Modrego, F. (Editores). De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).

Rao, V. 2006. On 'Inequality Traps' and Development Policy. World Bank: Development Outreach, February



pp. 10-13. Ravnborg, H. M. 2003. Pobreza y degradación ambiental en las laderas de Nicaragua. En: Escobar, G. (Editor). Pobreza y Deterioro Ambiental en América Latina. Santiago: FONTAGRO y Rimisp.

Reardon, Thomas y Vosti, Stephen A. 1997. Poverty-environment links in rural areas of developing countries. En S. A. Vosti y T. Reardon (editores) Sustainability, Growth and Poverty Alleviation. A policy and agroecological perspective. The John Hopkins University Press. Baltimore.

Redding, Stephen y Venables, Anthony J. 2004. Economic geography and international inequality. *Journal of International Economics* 62: 53 – 82.

Rey, Sergio J. and Mark V. Janikas. 2005. "Regional Convergence, Inequality, and Space," *Journal of Economic Geography*, 5, 155–176 .

Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 2008. Investigación Aplicada de Dinámicas Territoriales Rurales en América Latina: Marco Metodológico (versión 2). Documentos de Trabajo del Programa Dinámicas Territoriales Rurales N° 2. Santiago, Chile: Rimisp.

Rimisp- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 2007. Rural Territorial Dynamics: A research-based policy advice and capacity-development program for rural economic growth, social inclusion and sound environmental governance. Manuscrito.

Rodrik, D. (editor). 2003. In Search of Prosperity. Analytic Narratives on Economic Growth. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Rodrik, D. 2011. Why do (some, mostly international) economists dislike democracy so much? Comentario en el weblog del autor http://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/ 12 mayo.

Romero, W. y Zapil, P. 2009. Dinámica territorial del consumo, la pobreza y la desigualdad en Guatemala: 1998 - 2006. Documento de Trabajo N° 51. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

Romero, W., Peláez, A. & Frausto, M. 2010. La dinámica territorial en la cuenca Ostúa-Güija.

Sachs, J. 2001. Tropical underdevelopment. NBER Working Paper No. 8119. Washington DC: National Bureau of Economic Research.

Schejtman, A. y Berdegué, J.A. 2003. Desarrollo Territorial Rural. Debates y Temas Rurales. En, Ruben G. Echeverría (editor), Desarrollo Territorial Rural en América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 9-63.



- Sen, Amartya. 1992. *Inequality Reexamined*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, Amartya. 2000. *Development as Freedom*. Anchor Books. New York.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., and Fitoussi, J-P. 2009. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Manuscript. Downloaded from www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm.
- Tilly, C. 1998. *Durable Inequality*. University of California Press. Berkeley.
- Vaisman, L. y Paredes, J. 2010. *Género y Participación: los consejos de desarrollo rural sustentable*. CHAH Yucatán.
- Vosti, Stephen A. y Reardon, Thomas. 1997. The critical triangle of links among sustainability, growth and poverty alleviation. En S. A. Vosti y T. Reardon (editores) *Sustainability, Growth and Poverty Alleviation. A policy and agroecological perspective*. The John Hopkins University Press. Baltimore.
- Yúnez Naude, A., Paredes, L., Méndez, J., Estrada, I., España, A. Serrano, V., Becerril, J. 2012. La dinámica de un territorio en Yucatán. En: Berdegué, J. A. y Modrego, F. (Editores). *De Yucatán a Chiloé. Dinámicas Territoriales en América Latina*, Ed. Teseo, Buenos Aires. (En prensa).
- Yúnez-Naude, A. Arellano González, J., y Méndez Navarro, J. 2009. México: Consumo, pobreza y desigualdad a nivel municipal 1990-2005. Documento de Trabajo N°31 Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile.

